EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Quito, a 26 de mayo de 2022, a las 10:19h.
VISTOS:

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO: MOT-0910-SNCD-2021-PC (16001-2021-0011S).

FECHA DE INICIO DEL EXPEDIENTE: 5 de julio de 2021 (fs.133-135).

FECHA DE INGRESO A LA SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DISCIPLINARIO:
12 de noviembre de 2021 (fs. 2 del cuaderno de instancia).

FECHA DE PRESCRIPCIÓN: 5 de julio de 2022.

1. SUJETOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

1.1 DENUNCIANTE

Abogada Carmen Yolanda Castillo Guevara.

1.2 Servidora judicial sumariada

Abogada Jéssika Patricia Delgado Avilés, por sus actuaciones como Agente Fiscal de la provincia de Pastaza.

2. ANTECEDENTES

La abogada Carmen Yolanda Castillo Guevara, el 11 de febrero de 2021, presentó una denuncia en contra de la abogada Jéssika Patricia Delgado Avilés, ex Agente Fiscal de la Provincia de Pastaza, por presuntamente haber incurrido en manifiesta negligencia, toda vez que: *“La Fiscal de Pastaza, Ab. Delgado Avilés Jessika Patricia, subsumió su actuación en lo dispuesto en el numeral 7 del Art. 109.- Código Orgánico de la Función Judicial como infracciones gravísimas, al haber intervenido con manifiesta negligencia por no informarse en lo absoluto en la primera ocasión al formular cargos nuevamente recayendo en el sorteo de la causa No. 16281-2020-00034, en un proceso judicial que estaba vigente con identidad de hechos, de derecho y sujetos procesales, que era la causa 16281-2018-00548. / Y la segunda ocasión al formular cargos recayendo por sorteo en la causa No. 16281-2020-00424, sin haber subsanado la nulidad dispuesta en la causa inicial 16281-2018-00548 y no como erróneamente indica la Jueza del Juzgado de garantías penales de Pastaza Dra. Cisneros Ortiz Diana Lorena, en su resolución de sobreseimiento en la causa 16281-2020-00424. / Además de que sus motivaciones son totalmente contradictorias sin haber realizado ninguna diligencia investigativa nueva. En la causa 16281-2020-00034 manifiesta: ‘no cuento con la información necesaria para establecer una conducta penalmente relevante, ni los fundamentos para deducir una imputación’; y en la causa 16281-2020-00424 para formular cargos manifiesta ‘Señor Juez, dentro de la Investigación Previa han aparecido elementos de convicción los que hacen presumir la participación en calidad de autor/es y/o cómplice/s del delito que se investiga en contra de CASTILLO GUEVARA CARMEN YOLANDA, CANDO LANDA LUIS JORGE...’ para definitivamente resolver ‘...Finalmente dentro de la pesquisa no se tiene elementos probatorios que efectivamente compruebe en la existencia del hecho ilícito ni mucho peor existen indicios claros de que los procesados son los responsables de la conducta analizada...’ / Con esto se demuestra claramente que EN LA PRIMERA ACTUACIÓN NEGLIGENTE de la Fiscal Ab. Delgado Avilés Jessika Patricia, se caracterizó por no revisar y peor aún estudiar en absoluto el caso y el estado en que se encontraba, como es su obligación hacerlo, lo que vulneró mi derecho y garantía constitucional al debido proceso, en la forma prevista en*

el artículo 76 numeral 1 y numeral 7, literal i. Lo cual no fue convalidado por mi persona. / Y EN LA SEGUNDA ACTUACIÓN NEGLIGENTE, por infringir su deber como Fiscal, incumpliendo en su totalidad el principio de objetividad, de conformidad al Art. 5 numeral 21 del Código Orgánico Integral Penal, al no adecuar sus actos a un criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley y al respeto a los derechos de las personas, lo que vulneró mi derecho y garantía constitucional al debido proceso en la forma prevista en el artículo 76 numeral 7 literales a, b y c y especialmente el literal h, causándome angustia al no permitirme defenderme, al no despachar las diligencias solicitadas, limitándose a notificarme lo que habían realizado anteriormente sin subsanar el acto que provocó la nulidad procesal, vulnerando el derecho a la defensa al no poder ejercer mi derecho a la contradicción para poder estar presente en las pericias realizadas, conforme al Art. 5 numeral 13 del Código Orgánico Integral Penal. / Todo esto ha causado graves repercusiones tanto en lo económico, en mi trabajo, en mi vida diaria por la angustia causada psicológicamente, daño familiar psicológico ya que tengo hijos menores de edad que sufrieron mi ausencia al tener que viajar a esta provincia para poder defenderme en la causa señala, ya que se dictaron medidas cautelares por dos ocasiones en mi contra, como son la prohibición de salida del país y presentación periódica. Además de que se registran en el sistema SATJE tres causas penales por receptación en mi contra como si fuese una delincuente que se dedica a esas actividades, lo que vidente daña mi honra, ya que soy una persona preparada con estudios superiores.”.

Ante la denuncia presentada, al realizar el análisis del cumplimiento de requisitos, el abogado Dennys Andrés Ríos Lara, Coordinador Provincial de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura de Pastaza, mediante decreto de 9 de marzo de 2021, a las 15h22, dispuso que se remita copias certificadas del expediente administrativo al Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, para que se determine si la abogada Jéssika Patricia Delgado Avilés, ex agente Fiscal de Pastaza, incurrió en la falta disciplinaria imputada por la denunciante.

En atención, a dicho requerimiento, mediante resolución de 22 de abril de 2021, a las 15h57, dentro de la causa de declaratoria jurisdiccional 16100-2021-00003G, el Tribunal de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, con voto de mayoría de los doctores Tania Patricia Massón Fiallos y Bolívar Enrique Torres Ortiz, se determinó que la abogada Jéssika Patricia Delgado Avilés, incurrió en la infracción disciplinaria contenida en el artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial; esto es, haber actuado con manifiesta negligencia, declaratoria que fue puesta en conocimiento de la Dirección Provincial de Pastaza, mediante Oficio 0420-SMCPJP-2021, de 14 de mayo de 2021, suscrito por el abogado Roberto Benavidez Guevara, Secretario Relator de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza; por lo que, la denuncia presentada por la abogada Carmen Yolanda Castillo Guevara, fue calificada la denuncia como completa, admitiéndose a trámite la misma.

En virtud de los antecedentes señalados, el doctor Pablo Santiago López Freire, Director Provincial de Pastaza del Consejo de la Judicatura de ese entonces, a través de auto de 5 de julio de 2021, instruyó el presente sumario disciplinario en contra de la abogada Jéssika Patricia Delgado Avilés, por sus actuaciones como Agente Fiscal de Pastaza, por presuntamente haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es por manifiesta negligencia.

Mediante providencia de 28 de julio de 2021, asume el conocimiento del proceso sumarial el doctor Bolívar Enrique Torres Ortiz, en calidad de Director Provincial subrogante de la Dirección Provincial de Pastaza del Consejo de la Judicatura y presenta su excusa para proseguir en dicho conocimiento, por cuanto habría dado opinión o consejo por escrito sobre el juicio materia de este sumario. La solicitud de excusa fue presentada ante el Director General del Consejo de la Judicatura, la cual una vez conocida, mediante resolución de 4 de agosto de 2021, suscrita por el abogado Mauricio Riofrío Cuadrado,

Director General del Consejo de la Judicatura en ese entonces, aceptó la excusa planteada y dispuso que se remita el expediente al Coordinador de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección Provincial de Pastaza del Consejo de la Judicatura, a fin de que continúe con la tramitación.

Una vez finalizada la fase de sustanciación del presente sumario, el abogado Eduardo Glicerio Guilcapi Allauca, Abogado Provincial 2 de la Unidad Provincial de Asesoría Jurídica de la Dirección Provincial de Pastaza del Consejo de la Judicatura, recomendó imponer la sanción de destitución del cargo a la abogada Jéssika Patricia Delgado Avilés, ex Agente Fiscal de Pastaza, por haber incurrido en la falta disciplinaria tipificada en el artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial; por cuanto, la fiscal sumariada habría actuado sin observar el principio de objetividad en la aplicación de la ley y el respeto del derecho de las personas, en contra de los procesados por el delito de receptación, pese a que en el auto de nulidad dictado en el juicio 16281-2018-00548, aun no se ejecutoriaba y la servidora sumariada solicitó la audiencia de formulación de cargos contra los mismos procesados; además que, no se notificó las nuevas actuaciones realizadas por la fiscal, además de no comparecer a la audiencia de formulación de cargos señalada en el juicio 16281-2020-00034, por la misma causa que contenía los mismos antecedentes objetivos y subjetivos.

Mediante Memorando DP16-CPCD-2021-0124-M, de 11 de noviembre de 2021, se remitió el presente expediente a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, para que se ponga en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura, expediente disciplinario que fue recibido el 12 de noviembre de 2021.

3. ANÁLISIS DE FORMA

3.1 Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 178 y los numerales 3 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador; el artículo 254 y los numerales 4 y 14 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, al que le corresponde velar por la transparencia y eficiencia de los órganos que la componen. Esta potestad constitucional y legal faculta al Consejo de la Judicatura para ejercer el control disciplinario respecto de las servidoras y los servidores de la Función Judicial, acorde con los principios y reglas establecidos en el Capítulo VII del Título II del Código Orgánico de la Función Judicial.

En consecuencia, el Pleno del Consejo de la Judicatura, es competente para conocer y resolver el presente sumario disciplinario.

3.2 Validez del procedimiento administrativo

El numeral 1 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que corresponde a toda autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.

En cumplimiento de dicha disposición, se advierte que la servidora sumariada fue citada en legal y debida forma a los correos electrónicos jdelgadolegal@hotmail.com y jdelgadolegal@gmail.com, con el auto de inicio del presente sumario, conforme se desprende de la razón de citación que consta a foja 139.

Asimismo, se le ha concedido a la sumariada el tiempo suficiente para que pueda preparar su defensa, ejercerla de manera efectiva, presentar las pruebas de descargo y contradecir las presentadas en su contra; en definitiva, se han respetado todas y cada una de las garantías vinculantes del debido proceso reconocidas en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, bajo el título de derechos de protección; por lo tanto, al no haberse incurrido en violación de ninguna solemnidad, se declara la validez del presente sumario administrativo.

3.3. Legitimación activa

El artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial, dispone que la acción disciplinaria se ejercerá de oficio o por denuncia.

El artículo 114 del cuerpo legal invocado, señala que los sumarios disciplinarios se iniciarán de oficio por la Directora o el Director Provincial, cuando llegare a su conocimiento información confiable de que el servidor judicial ha incurrido en una presunta infracción disciplinaria sancionada por este Código.

El literal c) del artículo 10 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los Servidores de la Función Judicial, establece que, corresponde a las o los Directores Provinciales: *“c) Iniciar sumarios disciplinarios en virtud de la comunicación realizada o dispuesta por una jueza, juez o tribunal, conforme el procedimiento determinado en el artículo 109.2 del Código Orgánico de la Función Judicial.”*

El artículo 16 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los Servidores de la Función Judicial, determina que: *“La acción disciplinaria se ejercerá de oficio, por denuncia o por comunicación judicial en los casos de las faltas disciplinarias contempladas en el artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. En los dos primeros casos, la acción iniciará cuando llegare a conocimiento del Consejo de la Judicatura información confiable que permita presumir la comisión de una infracción disciplinaria. No procede el ejercicio de oficio respecto de las faltas disciplinarias contempladas en el artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial.”*

El presente sumario disciplinario fue iniciado en virtud de la denuncia planteada por la abogada Carmen Yolanda Castillo Guevara, por cuanto la abogada Jéssika Patricia Delgado Avilés, Agente Fiscal de la Provincia de Pastaza, presuntamente habría incurrido en la infracción denominada manifiesta negligencia por efectos de sus actuaciones dentro de las causas judiciales 00555; 00548; 000424 y 00034, al no haber revisado y peor aún estudiar en absoluto el caso y el estado en que se encontraba, vulnerando al derecho y garantía constitucional al debido proceso y en segundo lugar por infringir el deber como fiscal, al incumplirse en su totalidad el principio de objetividad, de conformidad al artículo 5 numeral 21 del Código Orgánico Integral Penal, al no adecuar sus actos a un criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley y al respeto a los derechos de las personas, ya que no se subsanó el acto que provocó la nulidad procesal, vulnerando el derecho a la defensa sin poder ejercer el derecho a la contradicción.

En consecuencia, al ser parte procesal, se contó con legitimación activa suficiente para ejercer la presente acción disciplinaria de oficio, conforme así se lo declara y de conformidad con la normativa citada.

4. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN MOTIVO DEL SUMARIO

Mediante auto de inicio de 5 de julio de 2021, la el doctor Pablo Santiago López Freire, Director Provincial de Pastaza del Consejo de la Judicatura de ese entonces, consideró que la actuación de la servidora judicial sumariada presuntamente se adecuaría su conducta a la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial: *“A la servidora o servidor de la Función Judicial se le impondrá sanción de destitución, por las siguientes infracciones disciplinarias: (...) 7.- Intervenir en las causas como jueza, juez, fiscal o defensor público con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable declarados en el ámbito jurisdiccional, de conformidad con las disposiciones establecidas en los artículos siguientes, en concordancia con el artículo 125 de este Código; (...)”*.

5. OPORTUNIDAD EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN

El numeral 3 del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que, en relación a la infracción disciplinaria susceptible de sanción de destitución, prescribirá en un año, salvo respecto de aquellas infracciones que estuvieren vinculadas con un delito que prescribirán en cinco años.

Asimismo, en el inciso segundo del artículo 106 *ibíd.*, se establece que los plazos de prescripción de la acción disciplinaria se contarán en el caso de acciones de oficio desde la fecha que tuvo conocimiento la autoridad sancionadora. La iniciación del proceso disciplinario interrumpe la prescripción hasta por un año. Vencido este plazo, la acción prescribirá definitivamente.

En el presente caso, la denuncia planteada por la abogada Carmen Yolanda Castillo Guevara, llegó a conocimiento de la Dirección Provincial de Pastaza del Consejo de la Judicatura, el 11 de febrero de 2021; sin embargo, de conformidad con el inciso final del artículo 109.2 del Código Orgánico de la Función Judicial, la declaratoria jurisdiccional emitida por los Jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, se dictó el 22 de abril de 2021 y fue puesta en conocimiento de la autoridad provincial el 14 de mayo de 2021, mientras que la instrucción del sumario disciplinario data de 5 de julio de 2021, es decir el ejercicio de la acción disciplinaria se encuentra dentro del plazo contenido en la norma *ut supra*.

Por otra parte, el inciso tercero del artículo 106, de la norma *supra* citada, establece que la iniciación del proceso disciplinario interrumpe la prescripción hasta por un año. Vencido este plazo, la acción prescribirá definitivamente; por lo que, se determina que hasta la fecha de emisión de la presente resolución no ha transcurrido el plazo de un año para que la acción prescriba definitivamente, es decir que la potestad disciplinaria y sancionatoria se ha ejercido de manera oportuna, y desde su instrucción hasta la fecha no ha devenido en prescripción.

6. ANÁLISIS DE FONDO

6.1 Argumentos del abogado Eduardo Glicerio Guilcapi Allauca, Abogado Provincial 2 de la Unidad Provincial de Asesoría Jurídica de la Dirección Provincial de Pastaza del Consejo de la Judicatura (fs. 1028 a 1042)

Que *“(...) conforme se desprende del auto de inicio de este sumario, a la abogada Jessika Patricia Delgado Aviles se le imputa haber incurrido en la infracción disciplinaria denominada manifiesta negligencia la misma que se encuentra tipificada en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial conforme así fue declarado – con voto de mayoría- por los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza a través de resolución dictada el 22 de abril de 2021, a las 15h57 dentro de la causa N° 16100-2021-00003G.”* (Sic).

Que “En la obra *Responsabilidad civil de los Jueces y Magistrados por ignorancia inexcusable*, del autor Francisco Oliva Blázquez, en la página 15 indica que: ‘La negligencia o ignorancia debe derivarse de una actuación claramente dolosa o culposa del Juez o Magistrado, lo que se dará cuando se haya procedido con infracción manifiesta de una ley sustantiva o procesal, o faltando a algún trámite o solemnidad mandado observar bajo pena de nulidad’; (...) la negligencia en materia disciplinaria, es una forma de culpa que se caracteriza porque el agente infringe su deber, pero sin el conocimiento del mismo, siendo justamente esta falta de cuidado en informarse de manera adecuada y actuar conforme a dicho deber lo que lo hace imputable.”.

Que “A la luz de estas premisas, esta autoridad considera que la conducta de la abogada Jessika Patricia Delgado Aviles, ex Agente Fiscal de Pastaza, dentro de las causas señaladas en la denuncia presentada en su contra por parte de la aboga Yolanda Castillo Guevara evidentemente se subsume a la infracción disciplinaria denominada manifiesta negligencia, la misma que se encuentra descrita en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial que señala: ‘Intervenir en las causas como jueza, juez, fiscal o defensor público con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable declarados en el ámbito jurisdiccional’.”(Sic).

Que “(...) los presupuestos fácticos que sostienen este expediente se subsumen con certeza a la infracción que aquí se persigue, es decir manifiesta negligencia; toda vez que ha quedado claro que la responsabilidad por el manejo de la investigación fiscal recae en la abogada Jessika Patricia Delgado Avilés. Las actuaciones de la mentada ex agente fiscal han dado lugar a los juicios 16281-2018-00548 (delito de receptación) en contra de Luis Jorge Cando Landa, Carmen Yolanda Castillo Guevara y Sergio David Espín Romero, juicio dentro del que se declaró la nulidad a través de auto dictado por el juzgador de la Unidad Judicial Penal de Pastaza. Posteriormente el 14 de enero de 2021, a las 16h47, se presentó recurso de ampliación por parte de la Defensoría Pública de Pastaza, recurso que fue resuelto por la Jueza de la Unidad Penal con fecha 22 de enero de 2020 a las 12h24, en la que se manifiesta que ha resuelto todos los puntos controvertidos, es decir dicho auto tenía que ejecutoriarse después de tres días, pero sin embargo al no existir ni siquiera ejecutoría del auto anteriormente mencionado, la abogada Jessika Patricia Delgado Avilés, en ese entonces Agente Fiscal, solicitó, con fecha 14 de enero de 2021, a la jueza de la Unidad Judicial Penal de Pastaza señale audiencia de formulación de cargos en contra de los presuntos procesados Luis Jorge Cando Landa y Carmen Yolanda Castillo Guevara por el delito de receptación del mismo juicio que aún no se encontraba ejecutoriado el auto de nulidad, ingresando a la sala de sorteos y asignando el número de juicio para la Unidad Penal 16281-2020-00034 fijando la audiencia de formulación de cargos para el 23 de enero de 2020 a las 14h30, mediante auto dictado por la Unidad Judicial Penal el sábado 18 de enero del 2020 a las 22h00 por la abogada Jueza Cisneros Ortiz Diana Lorena como consta a fojas 35 del expediente. En la razón que consta a fojas 37 por la secretaria de dicha judicatura con fecha 23 de enero de 2020, indica que no se llevó a efecto dicha audiencia de formulación de cargos por cuanto a la Fiscal Jessika Patricia Delgado Avilés declinó su petición, auto dictado el 21 de febrero de 2020 por escrito a las 12h41. Es decir si bien la abogada Jessika Patricia Delgado Avilés solicitó el día y hora a la Jueza de la Unidad Penal para la audiencia de formulación de cargos argumentando que han aparecido elementos de convicción en contra de los autores Luis Jorge Cando Landa y Carmen Yolanda Castillo Guevara se debe indicar que sin tomar en cuenta su labor como fiscal, procedió a pedir una nueva formulación de cargos por el mismo delito de receptación, realizando de forma precipitada otra investigación fiscal sobre el mismo hecho que ya se había sustanciado en Fiscalía con un único número 160101817080124, aun cuando conocía que el juicio N° 16281-2018-00548 no se encontraba ejecutoriado el auto de nulidad y deba pronunciarse la resolución en el proceso anteriormente descrito.”.

Que “(...) La abogada Jessika Patricia Delgado Avilés no adecuó sus acciones a un criterio objetivo, en la correcta aplicación de la ley y el respeto a los derechos de las personas; pues se insiste, aun cuando el auto de nulidad dictado en el juicio N° 16281-2018-00548 no se ejecutoriaba ya se estaba solicitando la audiencia de formulación de cargos contra los mismos procesados del auto de nulidad, lo cual no hace más que advertir una conducta negligente, a lo cual se suma que no se notificó las nuevas actuaciones a los procesados con las diligencias realizadas por ella, subsanado así de esta manera los dos autos de nulidad dictados por la jueza de la Unidad Penal de Pastaza, al no comparecer a la audiencia de formulación de cargos señalado en el juicio No.16281-2020-00034 por la misma causa objetiva y subjetiva en contra de los procesados cuantas veces descritos.”.

Que “Con fecha 12 de agosto de 2020 la abogada Jessika Patricia Delgado Avilés solicitó a la jueza de la Unidad Penal de Pastaza, audiencia de formulación de cargo contra los mismos procesados anteriormente descritos por el delito de receptación ingresando al ámbito jurisdiccional con el N° 16281-2020-00424, realizándose así la audiencia de formulación de cargos en la que intervino la abogada Jessika Patricia Delgado Avilés, en la que la señora Jueza de Unidad Penal, dictó las medidas cautelares de los procesados Luis Jorge Cando Landa y Carmen Yolanda Castillo Guevara, sin existir diligencia alguna dentro de la instrucción fiscal pese haberse presentado acusaciones particulares por Myriam Marlene Lopez (sic) Atiaja y Sergio David Espin. A la postre, la abogada Jessika Patricia Delgado Avilés con fecha 4 de diciembre de 2020 emitió su dictamen abstentivo, a favor de los procesados por no existir elementos de convicción, resolviendo la señora jueza el sobreseimiento de la causa con fecha 23 de diciembre de 2020 a las 08h39 minutos y ordenando el levantamiento de todas las medidas cautelares dejando por sus actuaciones como fiscal en la impunidad un delito.” (Sic).

Que “A través de resolución dictada el 22 de abril de 2021, a las 15h57, el Tribunal de la Sala Provincial Multicompetente de la Corte de Justicia de Pastaza, con voto de mayoría de los señores jueces doctores Tania Masson Fiallos y Bolívar Torres Ortiz (voto salvado del señor doctor Carlos Medina Riofrio) determinó que la abogada Jessika Patricia Delgado Aviles(sic) incurrió en la infracción disciplinaria denominada manifiesta negligencia como consecuencia de sus actuaciones en las causas judiciales descritas en la denuncia presentada en su contra por la abogada Carmen Yolanda Castillo Guevara.”.

Que con fundamento en los antecedentes señalados, la autoridad provincial, señaló que la servidora sumariada habría incurrido en la infracción tipificada en el artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, y por lo tanto, se le imponga la sanción de destitución.

6.2 Argumentos de la abogada Jéssika Patricia Delgado Avilés, por sus actuaciones como Agente Fiscal de la provincia de Pastaza (fs.143 a 149)

Que “El día 4 de abril del 2017 se conoció el parte policial sobre un vehículo retenido, en cual se sortea como acto administrativo número 1216 -AA-RQ-199, pero dentro del mismo se dispone varios diligencias, investigativas, en donde pese a tener la documentación de propiedad, de la agencia de tránsito, de la cosa ensambladora la cual no pudo identificarse los números secretos y por esa razón se dispone lo pericia de Análisis de Numeraciones Seriales (REVENIDO QUÍMICO) en el vehículo de placas PNK-201, marca Mazda, de propiedad de SERGIO DAVID ESPÍN ROMERO. Con fecha 7 de agosto del 2017 se recibe el informe de Análisis de Numeraciones Seriales (REVENIDO QUÍMICO) Nro. CNCMLCF-JSZJ 6-CRIM-ANS-2017-006-PER y en base al mismo ya que en las conclusiones establecía que chasis, motor y plaquetas correspondían a una serie de identificación original y en base a lo documentación notariada donde se justifica lo propiedad se dispone lo devolución del vehículo de placas PNK-201, marco Mazda, a su propietario el señor SERGIO DAVID ESPÍN ROMERO, bajo condición de que en caso de requerirlo el mismo sea presentado para posteriores diligencias. Al existir

otra parte interesada la misma impugna el informe y se sorteó un nuevo perito del área de Análisis de Numeraciones Seriales (REVENIDO QUÍMICO). Sin embargo, previo a disponer la nueva pericia con el perito sorteado, la Ab. Johana Padilla Luna dispone iniciar una ndd por el delito de receptación, el cual fue sorteado con la Denuncia 160101817080124 a la Fiscalía de Soluciones Rápidas 1 en donde el titular era el Dr. Edgar Cojas(+) Robalino. Dentro de los (sic) diligencias investigativas en primera instancia consta documentación solicitada en donde se evidencia diligencias destinados a investigar al perito que realizó el informe de Análisis de Numeraciones Seriales (REVENIDO QUÍMICO) Nro. CNCMLCF-JSZ16-CRIM- ANS-2017-006-PER, que a demostrar el delito pesquisado. Se continúa con las diligencias investigativas, se receptor versiones, se recibe documentación del vehículo reportado como robado que es el de placas PRZ0369, MARCA MAZDA, CHASIS BF10E2M30680096C, MOTOR E5775245 de propiedad MYRIAN MARLENE LOPEZ ATIAJA y del vehículo de placas PNK0201, MARCA MAZDA, CHASIS 323NX0290894A, MOTOR 5754079 de propiedad de SERGIO DAVID ESPIN ROMERO. Con fecha 12 de septiembre del 2017 se entrega el nuevo informe de Análisis de Numeraciones Seriales (REVENIDO QUÍMICO) Nro. CNCMLCF-LCCF-Z9-ANS-2017-2234-PER, realizado por otro perito en donde en las conclusiones manifiesta que las series de identificación de chasis, motor, plaqueta si corresponden a una serie original, pero que se pueden observar una alteración por sueldo en el chasis denominada ventana. De fojas 196 a 205 consta la denuncia 0505001812110025 por Robo del vehículo de placas PRZ0369, MARCA MAZDA, CHASIS BF10E2M30680096C, MOTOR E5775245 de propiedad MYRIAN MARLENE LOPEZ ATIAJA, pero que no tiene las características del vehículo retenido, esto es del vehículo de placas PNK0201, MARCA MAZDA, CHASIS 323NX0290894A, MOTOR 5754079 de propiedad de SERGIO DAVID ESPIN ROMERO. De fojas 217 Y con el número secreto encontrado en el informe de revenido químico se solicitó a la Casa ensambladora Maresa, manifestando que dicho número no corresponde a ningún vehículo ingresado en el sistema de ensamble, lo que significaría que el mismo podría ser un vehículo importado (lo subrayado me corresponde), se solicitó también documentación al SRI para verificar el traspaso de dominio del vehículo retenido de placas PNK0201, donde se justifica la legalidad del dominio, versiones de los anteriores dueños y mecánicos quienes repararon el vehículo ya que tuvo dos accidentes de tránsito, justificando de esta manera que dicho vehículo tiene identificación original y que le pertenece al señor SERGIO DAVID ESPIN ROMERO.”.

Que respecto a las actuaciones fiscales, se determinó que: “14.- Con fecha 8 de diciembre del 2020 se emite el Dictamen Abstentivo a favor de los señores CARMEN YOLANDA CASTILLO GUEVARA y CANDO LANDA LUIS JORGE el cual es resuelto con fecha 23 de diciembre del 2020, en cuya parte final expone: ‘SEXTO-RESOLUCIÓN: Por todo lo antes indicado y ya que fiscalía ha establecido que de los resultados de la investigación Fiscalía ha determinado que no existen elementos para acusar, sino al contrario se ha desvanecido cualquier sospecha que pesaba en contra del procesado, conforme lo establece los Artículos 5 número 4, 600. 605 número 1 y 609 del COIP, dicto el presente SOBRESIMIENTO o favor de los ciudadanos procesados CANDO LANDA LUIS JORGE de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, con cédula de ciudadanía 180381375-5, domiciliado en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua y CASTILLO GUEVARA CARMEN YOLANDA de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, con cédula de ciudadanía 180323618-9, domiciliada en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, respecto del hecho fáctico por el cual se lo procesó en el presente juicio: ...6.1. conforme lo dispone el Artículo 77 número 10 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, así como la parte final del cuarto párrafo del Artículo 600 y el Artículo 607 del COIP, se levantan las medidas cautelares dictadas dentro del caso que nos ocupa...6.2. Revisada que ha sido los autos se desprende que el presente caso ha dado inicio por parte policial, por ende, no existe denuncia o acusación particular que sea objeto de calificación de malicia o temeridad conforme lo establece el Artículo 606 del COIP: 6.3. En función de los indicado por lo señora Fiscal Jesika Delgado en su dictamen abstentivo, por cuanto se presumiría el cometimiento de la infracción revista en el Art 292 del COIP, por parte el Fiscal que conoció la causa Dr. Edgar Cajas Robalino, se dispone que

Fiscalía inicie una investigación de lo aquí indicado, debiéndose emitir el oficio respectivo por secretaria. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...’.” (Sic).

Que señaló como actuaciones fiscales violentatorias es que: “(...) 1.- De fojas 101 del expediente consta el oficio FPZ-FESRI-1106-2017-001966-O. suscrito por la Ab. Paulina Manzano, fiscal encargada, en donde dispone al Gerente de la Transcomunidad EP de Pastaza se registre de manera inmediata la PROHIBICIÓN DE ENAJENAR de los vehículos de placas PRZ0369 y PNK0201, sin ser lo autoridad competente para disponer medidas cautelares, atribuyéndose funciones y violentando derechos de las partes. / 2.- De fojas 364 consta el oficio en donde el Dr. Edgar Cajas Robalino dispone la remarcación sin fundamentación legal alguna y de fojas 372 consta lo respuesta fundamentada del perito respecto a NO realizar la REMARCACIÓN (que adjunto), sin embargo con fecha 27 de julio y 31 de julio del 2018 se insiste en el cumplimiento de dicha REMARCACIÓN, la cual se cumple por insistencias del Fiscal y cuyo informe consta de fojas 399 a 401 y donde se verifica la remarcación ERRONEA dispuesta por el Fiscal, [...] es muy explícito el interés personal de lo autoridad Fiscal y la falta de objetividad y ausencia de conocimiento de la normativa vigente por parte del Dr. Edgar Cajas Robalino, quien conociendo el procedimiento y pese a la negativa del perito, dispuso algo contrario a la ley alterando la verdad para favorecer a una de las partes. / 3.- De fojas 413 en la parte final del impulso fiscal el homólogo Fiscal dispone al bodeguero de Policía Judicial retire el motor del vehículo de placas PNK0201 y una vez que ha retirado dicho motor de fojas 419 en el impulso fiscal Nro. 41 dispone la devolución del vehículo (sin motor) o lo señora LOPEZ ATIAJA MYRIAN MARLENE, y con dicha decisión SALOMÓNICA incurriría el Fiscal en el delito contemplado en el Art. 292 del COIP que establece: ‘... Alteración de evidencias y elementos de prueba.- Lo persona o lo o el servidor público, que altere o destruya vestigios, evidencias materiales u otros elementos de prueba para la investigación de una infracción, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años..’ / Con todo lo expuesto y de la revisión del expediente fiscal y judicial podrá colegir que de mi persona no he incurrido en ninguna falta contemplado en el Código Orgánico de la Función Judicial, e incluso sorprende de sobremanera dicha denuncia ya que la misma beneficia a la denunciante como parte procesada.” (Sic).

Que “(...) La Resolución Jurisdiccional dentro del proceso 16100-2021-00003G es completamente ajena a los hechos y contradictoria en derecho respecto a lo siguiente: / 1.1 En el acápite CUARTO donde se realiza el ANÁLISIS DE PETICIÓN PARA DECLARATORIA JURISDICCIONAL PREVIA, se verifica la falta de motivación al momento de enmarcar mi actuación en la infracción contenido en el artículo 109.7 del Código Orgánica de la Función Judicial, ya que no existe un análisis de los hechos frente o la existencia de las circunstancias constitutivas de lo infracción conforme lo manda el art. 110 del Código Orgánica de lo Función Judicial, (...) sobre todo se indique los resultados dañosos que supuestamente ocasionó mi actuación como Fiscal desde el año 2020. (...) SEXTO: RESOLUCIÓN, es evidente que los señores Jueces no han revisado el expediente íntegro de Fiscalía, a fin de verificar, quienes fueron los Fiscales que conocieron la noticia de delito 160101817080124, ya que mediante memorando Nro. FPZ- DP-2019-00295-M, de fecha 25 de noviembre de 2019, avoco conocimiento de lo Unidad que era del Fiscal Edgar Cajas(+), y mediante acción de personal 4994-DTH-FGE de fecha 12 de diciembre del 2019, fui suspendida del cargo por 30 días. Ni siquiera han solicitado las acciones de personal de todos los agentes Fiscales que conocieron lo causa, no se tomó en cuenta lo que manda el art. 115 del Código Orgánico de la Función Judicial, en consideración a lo que manda el COIP en el Art. 444 claramente establece las Atribuciones de la o el fiscal y en el numeral 3 expresamente dice: ‘Formular cargos, impulsar y sustentar la acusación de haber mérito o abstenerse del ejercicio público de lo acción’, es decir cada acto realizado en calidad de Fiscal por mi persona estuvo enmarcado en base a los atribuciones establecidos por la constitución y la ley. NO se revisaron los directrices Fiscales para el sorteo de las noticias de delito, las resoluciones para el sorteo de las peticiones de formulación de cargos, ya que se evidencia el desconocimiento de dichos procedimientos misionales y administrativos. En dicho acápite de RESOLUCIÓN establecen erróneamente los dos jueces lo

siguiente: ‘...precipitándose o realizar otra investigación sobre el mismo hecho que se substancio en Fiscalía con un único número este es 160101817080124, a sabiendas que el juicio No. 16281- 2018-00548 no se encontraba ejecutoriado el auto de nulidad y deba pronunciarse la resolución en el proceso anteriormente descrito, y violentando así lo que dispone la norma constitucional en el Art. 76 numeral 7 literal i CRE. Se ha vulnerado el debido proceso en el Art. 76 numeral 1 y 7 de lo Constitución de República del Ecuador, es decir con la documentación del proceso se probó su actuación negligente a su deber como Fiscal, incumpliendo el principio de objetividad como lo establece el Art. 5.21 del COIP al no adecuar sus acciones a un criterio objetivo, en la correcta aplicación de la ley y el respeto a los derechos de las personas. Es decir, no se ejecutoriaba todavía el auto de nulidad en el juicio No. 16281-2018-00548, ya se estaba solicitando lo audiencia de formulación de cargos contra los mismos procesados del auto de nulidad, actuando con uno enorme negligencia de la Fiscal antes mencionada y sin notificar las nuevos actuaciones o los procesados con las diligencias realizados por ella, subsanado así de esta manera los dos autos de nulidad dictados por la jueza de la Unidad Penal de inteligenciar a su Autoridad de que en ningún momento se ha iniciado una nueva investigación, es por eso que desde el año 2017 se ha mantenido la noticia de delito o investigación previa 160101817080124, (...) Cabe mencionar que de acuerdo a estas directrices los Fiscales de los Unidades Especializadas no somos los responsables del sorteo o asignación de investigaciones, lo que una vez más PREVALECE EN DICHA RESOLUCIÓN de los dos Señores JUECES, es una falta de conocimiento de las atribuciones de los Fiscales de la normativa que regula o los mismos en sus actuaciones. Mucho peor aún establecer una responsabilidad en mi persona por que se hayan generado sorteos de causas judiciales (RESPONSABILIDAD DE JUDICATURA)’. (Sic).

Que la resolución no contiene un acápite que analice las alegaciones presentadas en el proceso, inobservando los principios de motivación y tutela judicial efectiva.

Que tampoco se realiza un análisis sobre la serie de nulidades procesales que no fueron a su costa y no se pronuncian sobre la deficiente actuación del Defensor Público, abogado Telmo Arteaga y la propia denunciante quien es abogada y si no estaba de acuerdo con dichas decisiones, debían impugnarlas en el momento oportuno, pero no lo hicieron, beneficiándose a lo postre de su propia negligencia, así también se omite las actuaciones del Fiscal Edgar Cajas (+), así como otras actuaciones como: “(...) 1.- De fojas 101 del expediente consta el oficio FPZ-FESR1-1106-2017-001966-O, suscrito por la Ab. Paulina Manzano, fiscal encargada, en donde dispone al Gerente de la Transcomunidad EP de Pastaza se registre de manera inmediata la PROHIBICIÓN DE ENAJENAR de los vehículos de placas PRZ0369 y PNK0201, sin ser la autoridad competente para disponer medidas cautelares, atribuyéndose funciones y violentando derechos de las partes. / 2.- De fojas 364 consta el oficio en donde el Dr. Edgar Cajas Robalino dispone la remarcación sin fundamentación legal alguna y de fojas 372 consta lo respuesta fundamentada del perito respecto a NO realizar LA REMARCACIÓN, sin embargo con fecha 27 de julio y 31 de julio del 2018 se insiste en el cumplimiento de dicha REMARCACIÓN, la cual se cumple por insistencias del fiscal y cuyo informe consta de fojas 399 a 401 donde se verifica la Remarcación ERRONEA dispuesta por el Fiscal quien al disponer todo esto se predomina por parte de la suscrita estaría incurriendo en lo establecido en el Art. 272 del COIP que establece: ‘Fraude procesal.- La persona que con e/ fin de inducir a engaño a la o al juez en el decurso de un procedimiento civil o administrativo, antes de un procedimiento penal o durante él, oculte los instrumentos o pruebas, cambie el estado de los cosas, lugares o personas. Será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años. Con igual pena será sancionada quien conociendo lo conducta delictuosa de una o varias personas, les suministren alojamiento o escondite, o les proporcionen los medios para que se aprovechen de los efectos del delito cometido, o les favorezcan ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción, o utilizando las señales o huellas del delito, para evitar su represión y los que, estando obligados por razón de su profesión, empleo, arte u oficio, a practicar el examen de los señales o huellas del delito o el esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad, con

propósito de favorecerlos.’, es muy explícito el interés personal de la autoridad Fiscal y la falta de objetividad y ausencia de conocimiento de la normativa vigente por parte del Dr. Edgar Cajas Robalino (...)” (Sic).

7. HECHOS PROBADOS

7.1 A foja 371, consta copia certificada del Oficio FPZ-FESR1-1106-2018-001560-O, de 24 de septiembre de 2018, emitido dentro de la investigación previa 160101817080124 y dirigido a la Jueza o Juez de la Unidad Judicial Penal y Tránsito de Pastaza (Puyo), suscrito por el abogado Edgar Alejandro Cajas Robalino, Agente Fiscal Fiscalía de Soluciones Rápidas 1, en el cual se solicitó que se convoque a audiencia de Formulación de Cargos en contra de los señores Luis Jorge Cando Landa y Carmen Yolanda Castillo Guevara.

7.2 De fojas 482 a 484, constan copias certificadas del auto de nulidad emitida el 10 de enero de 2020, por la abogada Diana Lorena Cisneros Ortiz, Jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Pastaza, dentro del proceso judicial 16281-2018-00548, seguido por el delito de receptación, el cual atiende un requerimiento de la procesada, señora Carmen Yolanda Castillo Guevara, quien solicitó que se declare la prescripción de la acción penal, ante lo cual, la juzgadora atiende el mismo, indicando lo siguiente: en la investigación, indicando que no se tomó en consideración este mandato; por lo que, se resolvió: “(...) *DECLARO la NULIDAD de lo actuado, a partir de la foja 514 (inclusive) del expediente fiscal, esto a costas del Dr. Edgar Alejandro Cajas Robalino, (Fiscal que actuó a partir de la declaratoria de nulidad de fecha 4 de febrero de 2019, dictada por el Dr. Aurelio Quito). Fiscalía deberá proceder con la notificación a la ciudadana Carmen Yolanda Castillo Guevara y continuar con su investigación, aclarando que si fiscalía conforme a sus atribuciones decide formular cargos en contra de la ciudadana antes referida o cualquier otro investigado, deberá solicitar su pedido nuevamente por sala de sorteos de la Unidad Judicial Penal, ya que la declaratoria de nulidad se la realiza incluso previo a la petición de formulación de cargos que se ha formulado en esta causa, esto a efectos de que se pueda reparar el vicio procesal detectado en este momento (...)*” (Sic).

7.3 A foja 300, consta copia certificada del Oficio FPZ-FESR1-1106-2020-000050-O, de 14 de enero de 2020, emitido dentro de la investigación previa 160101817080124, por el presunto delito de receptación, y dirigido a la Jueza o Juez de la Unidad Judicial Penal y Tránsito de Pastaza (Puyo), suscrito por la abogada Jéssika Patricia Delgado Avilés, Agente Fiscal de la Fiscalía de Soluciones Rápidas 1 (sumariada), en el cual solicitó que se convoque a audiencia de Formulación de Cargos en contra de los señores Luis Jorge Cando Landa y Carmen Yolanda Castillo Guevara.

7.4 A foja 301, consta copia certificada del acta de sorteo para radicar competencia de la acción penal pública por el delito de receptación, seguido por la Fiscalía General del Estado, en contra de los señores Luis Jorge Cando Landa y Carmen Yolanda Castillo Guevara, realizada el 14 de enero de 2020, correspondiéndole a la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Pastaza, con el número de proceso 16281-2020-00034 (primera instancia y número de expediente de fiscalía 160101817080124).

7.5 A foja 305, consta copia certificada del auto emitido el 21 de febrero de 2020, por la doctora Diana Lorena Cisneros Ortiz, Jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Pastaza, dentro del proceso 16281-2020-00034, por el delito de receptación, en el cual se dispuso lo siguiente: “(...) *Una vez que se ha instalado la audiencia de Formulación de Cargos dentro de le presente causa la Ab. Jessika Delgado Aviles (sic), Fiscal de Pastaza, quien ha sido designada y sustancie el proceso investigativo No. 160101817080124, expediente por el cual se solicitó el señalamiento de día y hora para que se lleve a efecto la audiencia de formulación de cargos en contra de los señores CANDO LANDA LUIS JORGE y CASTILLO GUEVARA CARMEN YOLANDA, en lo principal y en relación a*

la petición expresa de la mentada fiscal quien solicita declinar de formulación de cargos y dejar sin efecto el petitorio de señalamiento de la audiencia de formulación de cargos realizada por el mismo Fiscal de Pastaza, quien manifiesta que a la fecha no cuenta con la información necesaria para establecer una conducta penalmente relevante, ni los fundamentos para deducir una imputación en contra del investigado, (...) Por lo expuesto se deja sin efecto el agendamiento que se ha realizado por la coordinadora de audiencias del Consejo de la Judicatura de Pastaza. (...) Por todo lo expuesto en el momento legal oportuno de así requerirlo Fiscalía quien tiene el impulso procesal dentro de esta causa de ejercicio público de la acción, solicitara nuevo día y hora para la audiencia de formulación de cargos en contra de los investigados por cuerda separada. En tal virtud se dispone el ARCHIVO de la presente causa, a efectos del sistema SATJE (...)" (Sic).

7.6 A foja 316, consta copia certificada del Oficio FPZ-FESR1-1106-2020-000574-O, de 12 de agosto de 2020, emitido por la abogada Jéssika Patricia Delgado Avilés, Agente Fiscal Fiscalía de Soluciones Rápidas 1, dentro de la investigación previa 160101817080124 y dirigido a la Jueza o Juez de la Unidad Judicial Penal y Tránsito de Pastaza (Puyo), en el cual solicita que se convoque a la audiencia de Formulación de Cargos en contra de los señores Luis Jorge Cando Landa y Carmen Yolanda Castillo Guevara.

7.7 A foja 317, consta copia certificada del acta de sorteo para radicar competencia de la acción penal pública por el delito de receptación, seguido por la Fiscalía General del Estado, en contra de los señores Luis Jorge Cando Landa y Carmen Yolanda Castillo Guevara, realizada el 14 de agosto de 2020, correspondiéndole a la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Pastaza, conformada por el abogada Diana Lorena Cisneros Ortiz y signado con el número 16281-2020-00424 (primera instancia y número de expediente de fiscalía 16010181).

7.8 De fojas 349 a 353, constan copias certificadas del Oficio FPZ-FESR1-1106-2020-001721-O, de 4 de diciembre de 2020, suscrito por la abogada Jéssika Patricia Delgado Avilés, Agente Fiscal de la Fiscalía de Soluciones Rápidas 1 de Pastaza, dirigido al Juez /a de la Unidad Judicial Penal y Tránsito de Pastaza (Puyo), el cual contiene el dictamen abstentivo emitido en la investigación 160101817080124 (juicio 16281-2020-00424), por la referida servidora.

7.9 De fojas 357 a 360, constan copias certificadas del auto de sobreseimiento suscrito por la abogada Diana Lorena Cisneros Ortiz, Jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Pastaza, de 23 de diciembre de 2020, dentro del expediente 16281-2020-00424, por el delito de receptación seguido por la Fiscalía General del Estado, en contra de los señores Luis Jorge Cando Landa y Carmen Yolanda Castillo Guevara.

7.10 De fojas 112 a 122, constan copias certificadas de la resolución emitida por el Tribunal de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, dentro de la solicitud de declaratoria jurisdiccional 16100-2021-00003G, de 22 de abril de 2021, en la cual mediante voto de mayoría de los doctores Tania Patricia Massón Fiallos y Bolívar Enrique Torres Ortiz, y el voto salvado del doctor Carlos Alfredo Medina Riofrío, se estableció que la abogada Jéssika Patricia Delgado Avilés, ex Agente Fiscal de Pastaza incurrió en manifiesta negligencia, manifestando: “(...) **SEXTO: RESOLUCIÓN.-** *La negligencia en materia disciplinaria, es una forma de culpa que se caracteriza porque que el Agente infringe su deber, pero sin el conocimiento del mismo, siendo justamente esta falta de cuidado en informarse de manera adecuada y actuar conforme a dicho deber lo que lo hace imputable. Para el tratadista GAMARRA ‘Sostiene que la conducta negligente o descuidada, víctima del error configura un comportamiento culpable, que obliga al mismo reparar el daño, pero de manera alguna lo priva de la acción de nulidad y le asiste a la víctima, pues es un error subsanable’ pero de todas maneras hay el error y el vicio de la voluntad que existe. La manifiesta negligencia da lugar a un descuido a la*

atención y cuidado como Fiscal del actuar a su propio deber en el trámite y la ritualidad de una causa. Por tal razón este tribunal establece la naturaleza de la falta que se considera como negligente y está dentro del ámbito de derecho disciplinario, dentro del conjunto de normas sustanciales y procesales del cual el Estado asegura la obediencia, la disciplina, y el comportamiento ético de la moralidad y eficiencia de los servidores públicos, con el fin de asegurar un funcionamiento bueno de los servicios a su cargo en el caso que nos ocupa. La negligencia está tipificada en el Código Orgánico de la Función Judicial en el Art. 109 numeral 7. Respecto al grado de participación de la Fiscal Jessika Patricia Delgado Avilés de la Provincia de Pastaza, es evidente y claro su responsabilidad por el manejo de la investigación, que ha dado lugar a los juicios 16281-2018-00548 por el delito de receptación contemplado en el Art.202 inciso 1 del COIP en contra CANDO LANDA LUIS JORGE, CASTILLO GUEVARA CARMEN YOLANDA y ESPIN ROMERO SERGIO DAVID en el que se declaró la nulidad mediante auto por la Unidad Judicial Penal de Pastaza que consta a fojas 213 a 215 y vuelta con fecha 10 de enero de 2020 a las 17h13. Con fecha 14 de enero de 2020 a las 16h47 presentan la ampliación al auto dictado anteriormente por el Defensor Público de Pastaza, estando dentro del término legal que consta en fojas 217, corriéndose traslado del mismo a los sujetos procesales por 48 horas y resuelto esta ampliación por la Jueza de la Unidad Penal con fecha 22 de enero de 2020 a las 12h24 como consta a fojas 221, en la que se manifiesta que ha resuelto todos los puntos controvertidos, es decir este auto tenía que ejecutoriarse después de tres días, pero sin embargo al no existir ni siquiera ejecutoria del auto anteriormente mencionado. La señora Fiscal Jessika Patricia Delgado Avilés a fojas 33 del cuaderno de esta corte, solicita a la Jueza de la Unidad Penal y Tránsito de Pastaza con fecha 14 de enero de 2020 la audiencia de formulación de cargos en contra de los presuntos procesados CANDO LANDA LUIS JORGE y CASTILLO GUEVARA CARMEN YOLANDA por el delito de receptación del mismo juicio que aún no se encontraba ejecutoriado el auto de nulidad, ingresando a la sala de sorteos y asignando el número de juicio para la Unidad Penal 16281-2020-00034 fijando la audiencia de formulación de cargos para el 23 de enero de 2020 a las 14h30, mediante auto dictado por la Unidad Judicial Penal el sábado 18 de enero del 2020 a las 22h00 por la abogada Jueza Cisneros Ortiz Diana Lorena como consta a fojas 35 del expediente. En la razón que consta a fojas 37 por la secretaria de dicha judicatura con fecha 23 de enero de 2020, indica que no se llevó a efecto dicha audiencia de formulación de cargos por cuanto a la Fiscal Jessika Patricia Delgado Avilés declinó su petición, auto dictado el 21 de febrero de 2020 por escrito a las 12h41 al respecto debo indicar, si bien la señora Fiscal Jessika Patricia Delgado Avilés solicitó el día y hora a la Jueza de la Unidad Penal para la audiencia de formulación de cargos, indicando que han aparecido elementos de convicción en contra de los autores CANDO LANDA LUIS JORGE y CASTILLO GUEVARA CARMEN YOLANDA sin percatarse de su labor como Fiscal, procede a pedir una nueva formulación de cargos por el mismo delito a los acusados por los mismos hechos el delito de receptación contemplado en el Art.202 inciso primero del COIP, precipitándose a realizar otra investigación sobre el mismo hecho que se substancio en Fiscalía con un único número este es 160101817080124, a sabiendas que el juicio No. 16281-2018-00548 no se encontraba ejecutoriado el auto de nulidad y deba pronunciarse la resolución en el proceso anteriormente descrito, y violentando así lo que dispone la normal constitucional en el Art.76 numeral 7 literal i CRE. Se ha vulnerado el debido proceso en el Art.76 numeral 1 y 7 de la Constitución de República del Ecuador, es decir con la documentación del proceso se probó su actuación negligente a su deber como Fiscal, incumpliendo el principio de objetividad como lo establece el Art. 5.21 del COIP al no adecuar sus acciones a un criterio objetivo, en la correcta aplicación de la ley y el respeto a los derechos de las personas. Es decir, no se ejecutoriaba todavía el auto de nulidad en el juicio No.16281-2018-00548, ya se estaba solicitando la audiencia de formulación de cargos contra los mismos procesados del auto de nulidad, actuando con una enorme negligencia de la Fiscal antes mencionada y sin notificar las nuevas actuaciones a los procesados con las diligencias realizadas por ella, subsanado así de esta manera los dos autos de nulidad dictados por la jueza de la Unidad Penal de Pastaza. Al no comparecer a la audiencia de formulación de cargos señalado en el juicio No.16281-2020-00034 por la misma causa objetiva y subjetiva en contra de los procesados cuantas veces

descritos. Con fecha 12 de agosto de 2020 la Abg. Jessika Patricia Delgado Avilés solicita a la jueza de la Unidad Penal de Pastaza, audiencia de formulación de cargo contra los mismos procesados anteriormente descritos por el delito de receptación ingresando al ámbito jurisdiccional con el No.16281-2020-00424. Realizándose así la audiencia de formulación de cargos en la que intervino la Abg. Jessika Patricia Delgado Avilés, en la que la señora Jueza de Unidad Penal, dictó las medidas cautelares de los procesados CANDO LANDA LUIS JORGE y CASTILLO GUEVARA CARMEN YOLANDA. Sin existir diligencia alguna dentro de la instrucción fiscal pese haberse presentado acusaciones particulares por LOPEZ ATIAJA MYRIAN MARLENE y ESPIN ROMERO SERGIO DAVID en contra de los procesados CANDO LANDA LUIS JORGE y CASTILLO GUEVARA CARMEN, la señora Fiscal Jessika Patricia Delgado Avilés con fecha 4 de diciembre de 2020 emite su dictamen abstentivo, a favor de los procesados por no existir elementos de convicción, resolviendo la señora jueza el sobreseimiento de la causa con fecha 23 de diciembre de 2020 a las 08h39 minutos y ordenando el levantamiento de todas la medidas cautelares dejando por sus actuaciones como Fiscal en la impunidad un delito. Por las consideraciones expuestas este tribunal **RESUELVE**. Declarar la existencia de la negligencia manifiesta de la Doctora Jessika Patricia Delgado Avilés en el cumplimiento de sus funciones en calidad de Agente Fiscal de Pastaza, por las razones invocadas en esta resolución. Ejecutoriado que fuera este auto, devuélvase el trámite a la autoridad competente dejando copias certificadas en el archivo de esta Corte Provincial. (...)” (Sic).

8. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

La Corte Constitucional del Ecuador, respecto a la potestad de la Administración Pública, en la rama del derecho disciplinario, ha establecido lo siguiente: “(...) En el caso específico de la Administración pública, el Estado despliega sus facultades sancionatorias a efectos de asegurar que los servidores y servidoras públicas desarrollen sus actividades conforme a los fines de interés público que la Constitución y la ley establecen. Así, el Derecho administrativo sancionador y el Derecho disciplinario, de forma diferenciada y autónoma, aunque no necesariamente aislada al Derecho penal, regulan la determinación de la responsabilidad administrativa a la cual está sujeta todo servidor y servidora pública, según el artículo 233 de la Constitución. Esta diferenciación y autonomía implican ciertas especificidades de tipificación al concretar el principio de legalidad.”¹.

Conforme se desprende del auto de inicio, en el presente expediente se imputó a la servidora judicial sumariada haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es haber actuado con manifiesta negligencia, conforme así fue declarado por voto de mayoría de los doctores Tania Patricia Massón Fiallos y Bolívar Enrique Torres Ortiz (Juez ponente), y el voto salvado del doctor Carlos Alfredo Medina Riofrío (voto salvado), Jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, en resolución de 22 de abril de 2021, emitida dentro de la causa 16100-2021-00003G; por cuanto, la servidora judicial sumariada evidenció una falta de objetividad en su actuación al inobservar la aplicación de la ley y el respeto del derecho de las personas, en contra de los procesados por el delito de receptación, pese a que en el auto de nulidad dictado en el juicio 16281-2018-00548, aun no se ejecutoriaba, y la servidora sumariada solicitó la audiencia de formulación de cargos contra los mismos procesados; además que, no se notificó las nuevas actuaciones realizadas por la fiscal, además de no comparecer a la audiencia de formulación de cargos señalada en el juicio 16281-2020-00034, por la misma causa objetiva y subjetiva.

De la revisión de las pruebas aportadas en el presente expediente disciplinario, consta que en el desarrollo de la investigación previa 160101817080124, por el presunto cometimiento del delito de receptación, a cargo del abogado Edgar Alejandro Cajas Robalino, Agente Fiscal Fiscalía de Soluciones

¹ Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 3-19-CN/20, Agustín Grijalva, párr. 45. 2020.

Rápidas 1, mediante Oficio FPZ-FESR1-1106-2018-00001560-O, de 24 de septiembre de 2018, solicitó que uno de los jueces de la Unidad Penal y Tránsito de Pastaza (Puyo), convoque a audiencia de Formulación de Cargos en contra de los señores Luis Jorge Cando Landa y Carmen Yolanda Castillo Guevara.

Mediante auto de 10 de enero de 2020, la abogada Diana Lorena Cisneros Ortiz, Jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Pastaza, declaró la nulidad del proceso a costas del doctor Edgar Alejandro Cajas Robalino, Fiscal de la causa; ya que, el 4 de febrero de 2019, el doctor Aurelio Agustín Quito Cortez, Juez de la Unidad Penal con sede en el cantón Pastaza, dictó la nulidad desde el inicio de la formulación de cargos, debido a que no se le había notificado a la señora Carmen Yolanda Castillo Guevara (procesada), varias diligencias que se realizaron en la investigación previa, y a pesar de la disposición de nulidad la cual debía revisarse, no se cumplió debidamente con la orden del prenombrado juez, razón por la cual se volvió a declarar dicha nulidad.

Posteriormente, el 14 de enero de 2020, la servidora sumariada, abogada Jéssika Patricia Delgado Avilés, Agente Fiscal de la Fiscalía de Soluciones Rápidas 1 de la provincia de Pastaza, mediante Oficio FPZ-FESR1-1106-2020-000050-O, de 14 de enero de 2020, emitido dentro de la investigación previa 160101817080124, solicitó que uno de los jueces de la Unidad Judicial Penal y Tránsito de Pastaza (Puyo), que se convoque a la audiencia de Formulación de Cargos en contra de los señores Luis Jorge Cando Landa y Carmen Yolanda Castillo Guevara (fs. 300), el cual fue sorteado el mismo día correspondiéndole el número 16281-2020-00034 (fs. 301); y mediante auto de 21 de febrero de 2020, la doctora Diana Lorena Cisneros Ortiz, Jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Pastaza, dispuso que a petición de la fiscal (sumariada) se deje sin efecto el petitorio de señalamiento de audiencia; por cuanto, la misma abogada Jéssika Patricia Delgado Avilés (sumariada), indicó que no contaba con la información necesaria para establecer una conducta penalmente relevante, requerimiento que fue atendido según la petición propuesta y se dispuso el archivo de la causa (fs. 305).

Subsiguientemente, mediante Oficio FPZ-FESR1-1106-2020-000574-O, de 12 de agosto de 2020, suscrito por la abogada Jéssika Patricia Delgado Avilés, Agente Fiscal de la Fiscalía de Soluciones Rápidas, dentro de la investigación previa 160101817080124 y dirigido a la Jueza o Juez de la Unidad Judicial Penal y Tránsito de Pastaza (Puyo), la sumariada solicitó se convoque nuevamente a audiencia de Formulación de Cargos (fs. 316); petición que fue sorteada el 14 de agosto de 2020, correspondiéndole para su tramitación a la abogada Diana Lorena Cisneros Ortiz, Jueza Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Pastaza y, signado con el número de proceso 16281-2020-00424.

Finalmente, mediante Oficio FPZ-FESR1-1106-2020-001721-O, de 4 de diciembre de 2020, suscrito por la abogada Jéssika Patricia Delgado Avilés, Agente Fiscal de la Fiscalía de Soluciones Rápidas 1 de Pastaza, remitió al Juez /a de la Unidad Judicial Penal y Tránsito de Pastaza, emitiendo dictamen abstentivo en la investigación 160101817080124 (juicio 16281-2020-00424); por lo que, el 23 de diciembre de 2020, la abogada Diana Lorena Cisneros Ortiz, Jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Pastaza, dictó auto de sobreseimiento a favor de los procesados, según lo establecido por la Fiscalía (fs. 357 a 360).

Debido a los hechos antes mencionados, la abogada Carmen Yolanda Castillo Guevara (procesada), señaló en su escrito de denuncia, que la Agente Fiscal sumariada, no habría revisado debidamente la causa, lo cual, conllevó a que se produzca una serie de requerimientos para fijar la audiencia de formulación de cargos y que al no estar debidamente inteligenciada sobre los hechos investigados, requirió que se proceda a continuar con la misma, para finalmente declarar el sobreseimiento de los procesados; por lo que, en atención al artículo 109.2 del Código Orgánico de la Función Judicial, la autoridad sustanciadora solicitó la declaración jurisdiccional sobre la actuación de la fiscal denunciada,

petición que fue atendida mediante el auto de 22 de abril de 2021, dentro de la causa 16100-2021-00003G, con voto de mayoría de los doctores Tania Patricia Massón Fiallos, Bolívar Enrique Torres Ortiz (Juez ponente) y doctor Carlos Alfredo Medina Riofrío (voto salvado), Jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, a través de la que se establece que la abogada Jéssika Patricia Delgado Avilés, ex Agente Fiscal de Pastaza incurrió en manifiesta negligencia, tal como se fundamenta en la resolución, que en lo principal se determinó: “(...) **SEXTO: RESOLUCIÓN.-** *La negligencia en materia disciplinaria, es una forma de culpa que se caracteriza porque que el Agente infringe su deber, pero sin el conocimiento del mismo, siendo justamente esta falta de cuidado en informarse de manera adecuada y actuar conforme a dicho deber lo que lo hace imputable. (...) La manifiesta negligencia da lugar a un descuido a la atención y cuidado como Fiscal del actuar a su propio deber en el trámite y la ritualidad de una causa. Por tal razón este tribunal establece la naturaleza de la falta que se considera como negligente y está dentro del ámbito de derecho disciplinario, dentro del conjunto de normas sustanciales y procesales del cual el Estado asegura la obediencia, la disciplina, y el comportamiento ético de la moralidad y eficiencia de los servidores públicos, con el fin de asegurar un funcionamiento bueno de los servicios a su cargo en el caso que nos ocupa. La negligencia está tipificada en el Código Orgánico de la Función Judicial en el Art. 109 numeral 7. Respecto al grado de participación de la Fiscal Jessika Patricia Delgado Avilés de la Provincia de Pastaza, es evidente y claro su responsabilidad por el manejo de la investigación, que ha dado lugar a los juicios 16281-2018-00548 por el delito de receptación contemplado en el Art.202 inciso 1 del COIP en contra CANDO LANDA LUIS JORGE, CASTILLO GUEVARA CARMEN YOLANDA y ESPIN ROMERO SERGIO DAVID en el que se declaró la nulidad mediante auto por la Unidad Judicial Penal de Pastaza que consta a fojas 213 a 215 y vuelta con fecha 10 de enero de 2020 a las 17h13. Con fecha 14 de enero de 2020 a las 16h47 presentan la ampliación al auto dictado anteriormente por el Defensor Público de Pastaza, estando dentro del término legal que consta en fojas 217, corriéndose traslado del mismo a los sujetos procesales por 48 horas y resuelto esta ampliación por la Jueza de la Unidad Penal con fecha 22 de enero de 2020 a las 12h24 como consta a fojas 221, en la que se manifiesta que ha resuelto todos los puntos controvertidos, es decir este auto tenía que ejecutoriarse después de tres días, pero sin embargo al no existir ni siquiera ejecutoría del auto anteriormente mencionado. La señora Fiscal Jessika Patricia Delgado Avilés a fojas 33 del cuaderno de esta corte, solicita a la Jueza de la Unidad Penal y Tránsito de Pastaza con fecha 14 de enero de 2020 la audiencia de formulación de cargos en contra de los presuntos procesados CANDO LANDA LUIS JORGE y CASTILLO GUEVARA CARMEN YOLANDA por el delito de receptación del mismo juicio que aún no se encontraba ejecutoriado el auto de nulidad, ingresando a la sala de sorteos y asignando el número de juicio para la Unidad Penal 16281-2020-00034 fijando la audiencia de formulación de cargos para el 23 de enero de 2020 a las 14h30, mediante auto dictado por la Unidad Judicial Penal el sábado 18 de enero del 2020 a las 22h00 por la abogada Jueza Cisneros Ortiz Diana Lorena como consta a fojas 35 del expediente. En la razón que consta a fojas 37 por la secretaria de dicha judicatura con fecha 23 de enero de 2020, indica que no se llevó a efecto dicha audiencia de formulación de cargos por cuanto a la Fiscal Jessika Patricia Delgado Avilés declinó su petición, auto dictado el 21 de febrero de 2020 por escrito a las 12h41 al respecto debo indicar, si bien la señora Fiscal Jessika Patricia Delgado Avilés solicitó el día y hora a la Jueza de la Unidad Penal para la audiencia de formulación de cargos, indicando que han aparecido elementos de convicción en contra de los autores CANDO LANDA LUIS JORGE y CASTILLO GUEVARA CARMEN YOLANDA sin percatarse de su labor como Fiscal, procede a pedir una nueva formulación de cargos por el mismo delito a los acusados por los mismos hechos el delito de receptación contemplado en el Art.202 inciso primero del COIP, precipitándose a realizar otra investigación sobre el mismo hecho que se substancio en Fiscalía con un único número este es 160101817080124, a sabiendas que el juicio No. 16281-2018-00548 no se encontraba ejecutoriado el auto de nulidad y deba pronunciarse la resolución en el proceso anteriormente descrito, y violentando así lo que dispone la norma constitucional en el Art.76 numeral 7 literal i CRE. Se ha vulnerado el debido proceso en el Art.76 numeral 1 y 7 de la Constitución de*

*República del Ecuador, es decir con la documentación del proceso se probó su actuación negligente a su deber como Fiscal, incumpliendo el principio de objetividad como lo establece el Art. 5.21 del COIP al no adecuar sus acciones a un criterio objetivo, en la correcta aplicación de la ley y el respeto a los derechos de las personas. Es decir, no se ejecutoriaba todavía el auto de nulidad en el juicio No.16281-2018-00548, ya se estaba solicitando la audiencia de formulación de cargos contra los mismos procesados del auto de nulidad, actuando con una enorme negligencia de la Fiscal antes mencionada y sin notificar las nuevas actuaciones a los procesados con las diligencias realizadas por ella, subsanado así de esta manera los dos autos de nulidad dictados por la jueza de la Unidad Penal de Pastaza. Al no comparecer a la audiencia de formulación de cargos señalado en el juicio No.16281-2020-00034 por la misma causa objetiva y subjetiva en contra de los procesados cuantas veces descritos. Con fecha 12 de agosto de 2020 la Abg. Jessika Patricia Delgado Avilés solicita a la jueza de la Unidad Penal de Pastaza, audiencia de formulación de cargo contra los mismos procesados anteriormente descritos por el delito de receptación ingresando al ámbito jurisdiccional con el No.16281-2020-00424. Realizándose así la audiencia de formulación de cargos en la que intervino la Abg. Jessika Patricia Delgado Avilés, en la que la señora Jueza de Unidad Penal, dictó las medidas cautelares de los procesados CANDO LANDA LUIS JORGE y CASTILLO GUEVARA CARMEN YOLANDA. Sin existir diligencia alguna dentro de la instrucción fiscal pese haberse presentado acusaciones particulares por LOPEZ ATIAJA MYRIAN MARLENE y ESPIN ROMERO SERGIO DAVID en contra de los procesados CANDO LANDA LUIS JORGE y CASTILLO GUEVARA CARMEN, la señora Fiscal Jessika Patricia Delgado Avilés con fecha 4 de diciembre de 2020 emite su dictamen abstentivo, a favor de los procesados por no existir elementos de convicción, resolviendo la señora jueza el sobreseimiento de la causa con fecha 23 de diciembre de 2020 a las 08h39 minutos y ordenando el levantamiento de todas la medidas cautelares dejando por sus actuaciones como Fiscal en la impunidad un delito. Por las consideraciones expuestas este tribunal **RESUELVE**. Declarar la existencia de la negligencia manifiesta de la Doctora Jessika Patricia Delgado Avilés en el cumplimiento de sus funciones en calidad de Agente Fiscal de Pastaza, por las razones invocadas en esta resolución. Ejecutoriado que fuera este auto, devuélvase el trámite a la autoridad competente dejando copias certificadas en el archivo de esta Corte Provincial. (...)”.* (Sic) (El subrayado esta fuera del texto original).

En este orden, se puede observar que del análisis jurisdiccional señalado en líneas anteriores se puede observar que, de manera clara y explícita, los jueces del Tribunal de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, determinaron que la servidora sumariada habría inobservado los derechos fundamentales del debido proceso consagrados en el artículo 76² de la Constitución de la República del Ecuador; ya que, se denota su falta de atención al proceso investigativo cuando solicitó fecha para la formulación de cargos y de manera inmediata, solicitó que se deje sin efecto este requerimiento, dando lugar incluso a mover el aparato judicial para establecer una fecha en la agenda de audiencias y posteriormente la misma fiscal sumariada, solicitó que se deje sin efecto dicha petición, por cuanto no se habría analizado correctamente los hechos materia de la indagación, evidenciándose que el mismo expediente investigativo 160101817080124, debido a las varias peticiones de audiencia, se le había asignado otros números de procesos judiciales, para finalmente declarar el sobreseimiento y que según el criterio jurisdiccional esta decisión de abstención fiscal, dio lugar a la impunidad del delito.

En este contexto, a este órgano colegiado le corresponde analizar si dicha conducta se ajusta a la infracción disciplinaria tipificada como manifiesta negligencia, concepto que según el Diccionario Guillermo Cabanellas (EDITORIAL HELIESTA S.R.L. Primera edición. 1979 Undécima edición, 1993. I.S.B.N.: 950-9065-98-6), define: “*MANIFIESTO. Evidente, indudable, patente. Claro.

² Ref. **Constitución de la República del Ecuador**: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso (...)”

Descubierto. Innegable. NEGLIGENCIA. Omisión de la diligencia o cuidado que debe ponerse en los negocios, en las relaciones con las personas y en el manejo o custodia de las cosas. Dejadez. Abandono. Desidia. Falta de aplicación. Falta de atención. Olvido de órdenes o precauciones. NEGLIGENTE. El que incurre en negligencia (v.). El responsable de la misma. Descuidado, omiso. Despreocupado. Quien no presta la atención debida. Desidioso, abandonado, flojo, indolente. Imprudente; que no toma las precauciones del caso. (v. Culpable, Diligente.)”.

En este sentido, el Código Civil, dispone en su artículo 29 que la negligencia: “(...) *consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. (...)*”.

En virtud de dichos significados, se puede deducir que la manifiesta negligencia radica en aquel descuido o falta de cuidado que es claramente palpable y que no necesita de mayor investigación ni análisis para establecer que se ha operado con descuido; en otras palabras la manifiesta negligencia se presenta cuando por inacción o por acciones colmadas de desidia, un sujeto se separa considerablemente de una obligación positiva o negativa consagrada en una norma legítima que establezca mínimos básicos de diligencia, demostrando una absoluta falta de interés.

En la obra: “*Responsabilidad civil de los Jueces y Magistrados por ignorancia inexcusable*”, del autor Francisco Oliva Blázquez en la página 15 indica que: “*La negligencia o ignorancia debe derivarse de una actuación claramente dolosa o culposa del Juez o Magistrado, lo que se dará cuando se haya procedido con infracción manifiesta de una ley sustantiva o procesal, o faltando a algún trámite o solemnidad mandado observar bajo pena de nulidad.*”.

Adicionalmente, la Corte Constitucional del Ecuador, ha señalado sobre la manifiesta negligencia en Sentencia No. 3-19-CN/20, de 29 de julio de 2020, que: “**60.** *A diferencia del dolo, la negligencia en materia disciplinaria es una forma de culpa que se caracteriza porque el agente infringe su deber, pero sin el conocimiento del mismo, siendo justamente esta falta de cuidado en informarse de manera adecuada y actuar conforme a dicho deber lo que lo hace imputable. En efecto, el funcionario público está obligado a actuar con diligencia, lo cual implica no solo hacer su trabajo, sino hacerlo de forma adecuada³, para lo cual debe y requiere conocer este deber y actuar o abstenerse de actuar, conforme a él. Como lo destacó esta Corte en el párrafo 29 de esta sentencia, la debida diligencia es un principio constitucional de la Función Judicial. Al respecto, el artículo 172 segundo párrafo de la Carta Fundamental establece: ‘Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos de administración de justicia’. Seguidamente, en el inciso tercero del mismo artículo, la Constitución señala que ‘las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley’.⁴ / **61.** *Cuando el COFJ incluye la manifiesta negligencia entre las infracciones gravísimas, sancionadas por tanto con destitución, esta negligencia hace referencia a una falta gravísima del juez o jueza, fiscal o defensor público. Esta falta acarrea la responsabilidad administrativa de estos servidores judiciales por ignorancia, desatención o violación de normas, el incumplimiento de este deber constitucional de diligencia y de deberes legales personalmente les corresponden al actuar en una causa y como efecto de lo cual se produce siempre un daño a la administración de justicia y, eventualmente, a los justiciables y a terceros. Corresponde a**

³ Conforme al artículo 172 inciso segundo de la Constitución “*las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos de administración de justicia*”. Véase también los artículos 156 inciso cuarto y 100 numeral 2 del COFJ.

⁴ Al respecto se aclara que este perjuicio puede producirse también como consecuencia de actuaciones dolosas.

quien sanciona, evaluar dicho daño como una circunstancia constitutiva de la infracción, de conformidad con el artículo 110 numeral 5 del COFJ.”.

Por estas consideraciones, y de la revisión de los elementos constantes como prueba en el expediente disciplinario, ha quedado demostrado que la servidora sumariada, ha actuado inobservando las garantías que corresponden al debido proceso y dejando de atender los deberes que como a todo servidor corresponde, según lo señalado en el artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece que son deberes de las servidoras y servidores de la Función Judicial, los siguientes: “1. *Cumplir, hacer cumplir y aplicar, dentro del ámbito de sus funciones, la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, las leyes y reglamentos generales; el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos y resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura y de sus superiores jerárquicos; (...)*”, en armonía con el artículo 172 de la Constitución de la República del Ecuador; por lo tanto, corresponde a un deber funcional de los servidores judiciales y a su posición de garante, el cumplir su trabajo con honestidad, responsabilidad y legalidad su trabajo, conforme lo establecen las normas antes detallada.

En esa línea argumentativa ha quedado demostrado que la fiscal sumariada inobservó su deber funcional el cual se debe entender cómo: “(...) (i) *el cumplimiento estricto de las funciones propias del cargo, (ii) la obligación de actuar acorde a la Constitución y a la ley; (iii) garantizando una adecuada representación del Estado en el cumplimiento de los deberes funcionales. Además, se ha señalado que “se infringe el deber funcional si se incurre en comportamiento capaz de afectar la función pública en cualquier de esas dimensiones. El incumplimiento al deber funcional, es lo que configura la ilicitud sustancial que circunscribe la libertad configurativa del legislador, al momento de definir las faltas disciplinarias.”*⁵. En este sentido, el deber funcional se ajusta al marco constitucional del derecho disciplinario y desarrolla la naturaleza jurídica de éste, al construir el ilícito disciplinario a partir de la noción del deber funcional en el que el resultado material de la conducta no es esencial para estructurar la falta disciplinaria, sino el desconocimiento del deber que altera el correcto funcionamiento del Estado, por ende la ilicitud sustancial a pesar de no comprender el resultado material no impide la estructuración de la falta disciplinaria.

Por todo lo expuesto y al haberse demostrado que la abogada Jéssika Patricia Delgado Avilés, Agente Fiscal de la Fiscalía de Soluciones Rápidas 1 de la provincia de Pastaza, ha adecuado su conducta en la infracción disciplinaria establecida en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es manifiesta negligencia, razón por la cual se considera como autora material⁶ de dicha infracción.

9. REFERENCIA DE LA DECLARACIÓN JURISDICCIONAL PREVIA DE LA EXISTENCIA DE DOLO, MANIFIESTA NEGLIGENCIA Y ERROR INEXCUSABLE

De fojas 112 a 122, constan copias certificadas de la resolución dictada por el Tribunal de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, dentro de la petición de declaratoria jurisdiccional 16100-2021-00003G, el 22 de abril de 2021, en el cual los doctores Tania Patricia Massón Fiallos y Bolívar Enrique Torres Ortiz y Carlos Alfredo Medina Riofrío (voto salvado), establecieron que la abogada Jéssika Patricia Delgado Avilés, ex Agente Fiscal de Pastaza: “(...) **QUINTO: ANÁLISIS DE LOS PROCESOS QUE HACE MENCIÓN LA DENUNCIANTE.- Al hablar del proceso investigativo No. 160101814080124, por el delito de receptación tipificado en el Art. 202 en Código Orgánico**

⁵ Corte Constitucional, Sentencia C-819/06. Magistrado Ponente Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO

⁶ Véase de la siguiente manera: “Autor material: (...) *En el Derecho Disciplinario por tratarse de infracción de deberes, respecto de la autoría, siempre será autor por encontrarse en una posición de garante*”. Ramírez Rojas, Gloria.: Dogmática del Derecho Disciplinario en preguntas y respuestas, Instituto de Estudios del Ministerio Público, Colombia, 2008, p. 118.

Integral Penal seguido contra CANDO LANDA LUIS JORGE, CASTILLO GUEVARA CARMEN YOLANDA y ESPIN ROMERO SERGIO DAVID, el señor fiscal Edgar Alejandro Cajas Robalino(+) solicita audiencia de formulación de cargos el 24 de septiembre del 2018, por existir elementos de convicción en la investigación, en el ámbito jurisdiccional con el número de juicio 16281-2018-00548, realizándose la audiencia de formulación de cargos el 11 de octubre del 2018, del cual se inicia la instrucción fiscal (...) Reconocidas y calificadas que fueron en la instrucción fiscal, el señor Fiscal Edgar Alejandro Cajas Robalino (+), en este juicio No.16281-2018-00548 amparándose en el Art.599 inciso primero que habla de la conclusión de la instrucción fiscal y el Art.600 COIP emite el dictamen acusatorio con fecha 10 de enero de 2019 y solicita se lleve a efecto la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio, fijándose así para el 01 de febrero del 2019 en la cual el señor Juez Penal declara la nulidad acosta (sic) de la actuaria del despacho de la Abg. Yadira Vargas, por falta de notificación de los actos procesales a los procesados, notificación que se lo realiza por escrito el lunes 4 de febrero de 2019 a las 10h03. Con fecha 10 de julio de 2019 el Señor Fiscal, Dr. Edgar Alejandro Cajas Robalino (+) sobre este mismo juicio solicita al juez la audiencia de formulación de cargos de acuerdo a la acta de sorteo le asignan el número de juicio 16281-2019-00555 el 11 de julio de 2019 a las 16h36, con fecha 24 de julio de 2019 a fojas 162 el señor juez fija el día y hora que va a llevarse la audiencia de formulación de cargos esto es el 30 de julio de 2019 a las 10h30 (...) llevada a efecto y con la comparecencia del señor fiscal Edgar Alejandro Cajas que consta a fojas 163 y 164 vuelta, el juez propone cargos en contra de los procesados (...) El señor fiscal el 30 de octubre de 2019 solicita audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio en contra de los procesados, el Fiscal Edgar Cajas (+). El señor juez emite un auto indicando que anteriormente existía el número de juicio 16281-2018-00548 sobre esta misma causa y que se declaró la nulidad, por lo que este juicio 16281-2019-00550 dispone la acumulación de autos, amparándose en el Art. 16 numeral 1 Código Orgánico General de Procesos, ordenando que todos los escritos se incorporen a la causa 16281-2018-548. El señor juez fija la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio para el 9 de enero de 2020, en la que comparece la Dr. Maritza Reino Fiscal, en la que nuevamente se declara la nulidad, auto notificado por escrito con fecha 10 de enero de 2020 a las 17h13 a costas del Dr. Edgar Alejandro Cajas Robalino (+) (...) Con fecha 14 de enero de 2020 la Abg. Jessika Patricia Delgado Avilés solicita audiencia de formulación de cargos en contra de CANDO LANDA LUIS JORGE y CASTILLO GUEVARA CARMEN YOLANDA en base a la investigación previa 160101817080124, presentando a la sala de sorteos y signándole la causa con número de juicio 16281-2020-00034, la Jueza señala para el 23 de enero de 2020 las 14h30 se lleve a cabo la audiencia de formulación de cargos en contra de los procesados tantas veces mencionados. A fojas 37 existe la razón sentada por parte de la secretaria relatora de la Unidad Penal de Pastaza en la que indica textualmente que el día de hoy 23 de enero de 2020 a las 14h30 no se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargo (sic) por cuanto la señora fiscal Abg. Jessika Patricia Delgado Avilés DECLINÓ SU PETICIÓN, por lo que dispone la jueza se baje del sistema SATJE y se archive la causa, dejando en potestad poder solicitar la misma por cuerda separada. Y notificado por escrito a la Fiscal mediante providencia de 21 de febrero de 2020 a las 12h41, como consta a fojas 38 del cuaderno de esta sala. Con fecha 12 de agosto de 2020 en la investigación No. 160101817080124 solita al Señor Juez la formulación de cargos, la Abg. Jessika Patricia Delgado Avilés Fiscal, por delito de receptación contra de CANDO LANDA LUIS JORGE y CASTILLO GUEVARA CARMEN YOLANDA, sorteada que fue la misma en la Función Judicial con el No.16281-2020-00424, este accionar se solicita porque existen nuevos elementos de convicción en este delito, fijada que fue para el día 4 de septiembre de 2020 a la 9h00, se lleve a cabo la audiencia de formulación de cargos, realizada que fue la misma con la intervención de la Señora Fiscal Jessika Patricia Delgado Avilés se lleve a efecto la instrucción fiscal y dicte las medidas cautelares a los procesados CANDO LANDA LUIS JORGE y CASTILLO GUEVARA CARMEN YOLANDA, de prohibición de salida del país. En este proceso existe acusación particular por parte de LOPEZ ATIAJA MYRIAN MARLENE y ESPIN ROMERO SERGIO DAVID en contra de los procesados antes mencionados. Con fecha 4 de diciembre de 2020, la fiscal Jessika Patricia Delgado Avilés emite dictamen abstentivo a favor de los procesados

dirigido a la señora Jueza de la Unidad Penal de Pastaza, y con fecha 23 de diciembre de 2020, a las 08h39 emite el sobreseimiento a favor de los procesados y también dispone una investigación en contra del Dr. Edgar Alejandro Cajas Robalino (+) **SEXTO: RESOLUCIÓN.-** La negligencia en materia disciplinaria, es una forma de culpa que se caracteriza porque que el Agente infringe su deber, pero sin el conocimiento del mismo, siendo justamente esta falta de cuidado en informarse de manera adecuada y actuar conforme a dicho deber lo que lo hace imputable. Para el tratadista **GAMARRA 'Sostiene que la conducta negligente o descuidada, víctima del error configura un comportamiento culpable, que obliga al mismo reparar el daño, pero de manera alguna lo priva de la acción de nulidad y le asiste a la víctima, pues es un error subsanable'** pero de todas maneras hay el error y el vicio de la voluntad que existe. La manifiesta negligencia da lugar a un descuido a la atención y cuidado como Fiscal del actuar a su propio deber en el trámite y la ritualidad de una causa. Por tal razón este tribunal establece la naturaleza de la falta que se considera como negligente y está dentro del ámbito de derecho disciplinario, dentro del conjunto de normas sustanciales y procesales del cual el Estado asegura la obediencia, la disciplina, y el comportamiento ético de la moralidad y eficiencia de los servidores públicos, con el fin de asegurar un funcionamiento bueno de los servicios a su cargo en el caso que nos ocupa. La negligencia está tipificada en el Código Orgánico de la Función Judicial en el Art. 109 numeral 7. Respecto al grado de participación de la Fiscal Jessika Patricia Delgado Avilés de la Provincia de Pastaza, es evidente y claro su responsabilidad por el manejo de la investigación, que ha dado lugar a los juicios 16281-2018-00548 por el delito de receptación contemplado en el Art.202 inciso 1 del COIP en contra CANDO LANDA LUIS JORGE, CASTILLO GUEVARA CARMEN YOLANDA y ESPIN ROMERO SERGIO DAVID en el que se declaró la nulidad mediante auto por la Unidad Judicial Penal de Pastaza que consta a fojas 213 a 215 y vuelta con fecha 10 de enero de 2020 a las 17h13. Con fecha 14 de enero de 2020 a las 16h47 presentan la ampliación al auto dictado anteriormente por el Defensor Público de Pastaza, estando dentro del término legal que consta en fojas 217, corriéndose traslado del mismo a los sujetos procesales por 48 horas y resuelto esta ampliación por la Jueza de la Unidad Penal con fecha 22 de enero de 2020 a las 12h24 como consta a fojas 221, en la que se manifiesta que ha resuelto todos los puntos controvertidos, es decir este auto tenía que ejecutoriarse después de tres días, pero sin embargo al no existir ni siquiera ejecutoria del auto anteriormente mencionado. La señora Fiscal Jessika Patricia Delgado Avilés a fojas 33 del cuaderno de esta corte, solicita a la Jueza de la Unidad Penal y Tránsito de Pastaza con fecha 14 de enero de 2020 la audiencia de formulación de cargos en contra de los presuntos procesados CANDO LANDA LUIS JORGE y CASTILLO GUEVARA CARMEN YOLANDA por el delito de receptación del mismo juicio que aún no se encontraba ejecutoriado el auto de nulidad, ingresando a la sala de sorteos y asignando el número de juicio para la Unidad Penal 16281-2020-00034 fijando la audiencia de formulación de cargos para el 23 de enero de 2020 a las 14h30, mediante auto dictado por la Unidad Judicial Penal el sábado 18 de enero del 2020 a las 22h00 por la abogada Jueza Cisneros Ortiz Diana Lorena como consta a fojas 35 del expediente. En la razón que consta a fojas 37 por la secretaria de dicha judicatura con fecha 23 de enero de 2020, indica que no se llevó a efecto dicha audiencia de formulación de cargos por cuanto a la Fiscal Jessika Patricia Delgado Avilés declinó su petición, auto dictado el 21 de febrero de 2020 por escrito a las 12h41 al respecto debo indicar, si bien la señora Fiscal Jessika Patricia Delgado Avilés solicitó el día y hora a la Jueza de la Unidad Penal para la audiencia de formulación de cargos, indicando que han aparecido elementos de convicción en contra de los autores CANDO LANDA LUIS JORGE y CASTILLO GUEVARA CARMEN YOLANDA sin percatarse de su labor como Fiscal, procede a pedir una nueva formulación de cargos por el mismo delito a los acusados por los mismos hechos el delito de receptación contemplado en el Art.202 inciso primero del COIP, precipitándose a realizar otra investigación sobre el mismo hecho que se substancio en Fiscalía con un único número este es 160101817080124, a sabiendas que el juicio No. 16281-2018-00548 no se encontraba ejecutoriado el auto de nulidad y deba pronunciarse la resolución en el proceso anteriormente descrito, y violentando así lo que dispone la normal constitucional en el Art.76 numeral 7 literal i CRE. Se ha vulnerado el debido proceso en el Art.76 numeral 1 y 7 de la Constitución de

*República del Ecuador, es decir con la documentación del proceso se probó su actuación negligente a su deber como Fiscal, incumpliendo el principio de objetividad como lo establece el Art. 5.21 del COIP al no adecuar sus acciones a un criterio objetivo, en la correcta aplicación de la ley y el respeto a los derechos de las personas. Es decir, no se ejecutoriaba todavía el auto de nulidad en el juicio No.16281-2018-00548, ya se estaba solicitando la audiencia de formulación de cargos contra los mismos procesados del auto de nulidad, actuando con una enorme negligencia de la Fiscal antes mencionada y sin notificar las nuevas actuaciones a los procesados con las diligencias realizadas por ella, subsanado así de esta manera los dos autos de nulidad dictados por la jueza de la Unidad Penal de Pastaza. Al no comparecer a la audiencia de formulación de cargos señalado en el juicio No.16281-2020-00034 por la misma causa objetiva y subjetiva en contra de los procesados cuantas veces descritos. Con fecha 12 de agosto de 2020 la Abg. Jessika Patricia Delgado Avilés solicita a la jueza de la Unidad Penal de Pastaza, audiencia de formulación de cargo contra los mismos procesados anteriormente descritos por el delito de receptación ingresando al ámbito jurisdiccional con el No.16281-2020-00424. Realizándose así la audiencia de formulación de cargos en la que intervino la Abg. Jessika Patricia Delgado Avilés, en la que la señora Jueza de Unidad Penal, dictó las medidas cautelares de los procesados CANDO LANDA LUIS JORGE y CASTILLO GUEVARA CARMEN YOLANDA. Sin existir diligencia alguna dentro de la instrucción fiscal pese haberse presentado acusaciones particulares por LOPEZ ATIAJA MYRIAN MARLENE y ESPIN ROMERO SERGIO DAVID en contra de los procesados CANDO LANDA LUIS JORGE y CASTILLO GUEVARA CARMEN, la señora Fiscal Jessika Patricia Delgado Avilés con fecha 4 de diciembre de 2020 emite su dictamen abstentivo, a favor de los procesados por no existir elementos de convicción, resolviendo la señora jueza el sobreseimiento de la causa con fecha 23 de diciembre de 2020 a las 08h39 minutos y ordenando el levantamiento de todas la medidas cautelares dejando por sus actuaciones como Fiscal en la impunidad un delito. Por las consideraciones expuestas este tribunal **RESUELVE**. Declarar la existencia de la negligencia manifiesta de la Doctora Jessika Patricia Delgado Avilés en el cumplimiento de sus funciones en calidad de Agente Fiscal de Pastaza, por las razones invocadas en esta resolución. Ejecutoriado que fuera este auto, devuélvase el trámite a la autoridad competente dejando copias certificadas en el archivo de esta Corte Provincial. (...)*”.

De conformidad con la resolución antes transcrita, los jueces de la Sala Multicompetente de Justicia de Pastaza, en la que declararon la existencia de la negligencia manifiesta, se observa que la servidora judicial sumariada, habría adecuado su conducta a este actuar negligente; toda vez que, desde que le correspondió conocer la investigación previa 160101817080124, por el delito de receptación seguido en contra de los señores Luis Jorge Cando Landa y Carmen Yolanda Castillo Guevara, no realizó un adecuado estudio de las piezas procesales que constaba este expediente; por lo que, solicitó que se fije día y hora para que tenga lugar la audiencia de formulación de cargos y que por no realizar un examen exhaustivo de la causa, se pudo observar que el mismo proceso; sin embargo, solicitó que se deje sin efecto su solicitud ya que a su decir no tenía pleno conocimiento de la causa, además que la fiscal sumariada no habría notificado debidamente todas las diligencias realizadas en la investigación y tampoco atendió los requerimientos propuestos por los procesados; no obstante, emitió dictamen abstentivo, lo que conllevó a que la abogada Diana Lorena Cisneros Ortiz, Jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Pastaza, el 23 de diciembre de 2020, dictará auto de sobreseimiento a favor de los procesados, evidenciándose así su actuar negligente, al no haber puesto la atención debida en el análisis del proceso, previo a emitir cualquier tipo de resolución decisoria en el proceso judicial, contradiciéndose así en su actuación, lo que vulneraría la seguridad jurídica, hechos que fueron analizados por los juzgadores Ad-Quem, antes indicados.

Por lo expuesto, se determina que en el presente caso existe la declaratoria jurisdiccional previa dictada por los jueces Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, razón por la cual se cumple con uno de los parámetros determinados por parte de la Corte Constitucional del Ecuador, en su

Sentencia No. 3-19-CN/20, de 29 de julio de 2020 y en el artículo 131 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial.

10. ANÁLISIS DE LA IDONEIDAD DE LA AGENTE FISCAL SUMARIADA PARA EL EJERCICIO DE SU CARGO

La Corte Constitucional del Ecuador, en Sentencia No. 3-19-CN/20, de 29 de julio de 2020, señala: “**47.** *También en la jurisprudencia interamericana se ha insistido en la importancia de valorar motivadamente, la conducta de los servidores judiciales en los procesos disciplinarios, específicamente de los jueces y juezas. Según la Corte IDH, ‘el control disciplinario tiene como objeto valorar la conducta, idoneidad y desempeño del juez como funcionario público y, por ende, correspondería analizar la gravedad de la conducta y la proporcionalidad de la sanción. En el ámbito disciplinario es imprescindible la indicación precisa de aquello que constituye una falta y el desarrollo de argumentos que permitan concluir que las observaciones tienen la suficiente entidad para justificar que un juez no permanezca en el cargo’.*”⁷.

A foja 261, del presente expediente se encuentra la copia certificada de la acción de personal 2197-DTHGE, de 1 de agosto de 2016, en la cual se nombra como Agente Fiscal de Pastaza a la abogada Jéssika Patricia Delgado Avilés, así mismo consta la acción de personal 3191-DTH-FGE, de 29 de diciembre de 2020, en la que se registra la sanción de destitución (fs. 1013).

Bajo este contexto, se establece que la ex fiscal sumariada, cuenta con una trayectoria amplia y suficiente en el cargo de Agente Fiscal; por lo que, el caso puesto a su conocimiento y que es motivo del presente sumario disciplinario era de aquellos acorde a sus funciones y conocimientos; en tal virtud, al momento de conocer la causa, gozaban de idoneidad en el ejercicio de su cargo, conforme así se desprende la acción de personal 297-DTHGE, de 1 de agosto de 2016.

11. RAZONES SOBRE LA GRAVEDAD DE LA FALTA DISCIPLINARIA

De fojas 112 a 122, del expediente disciplinario, se encuentra la resolución emitida en el proceso judicial 16100-2021-00003G, en el cual se emitió el 22 de abril de 2021, la declaratoria jurisdiccional previa por los doctores Tania Patricia Massón Fiallos, Bolívar Enrique Torres Ortiz y Carlos Alfredo Medina Riofrío (voto salvado), Jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, quienes señalaron que dentro del proceso judicial por el presumible cometimiento del delito de receptación 16281-2020-00424, seguido en contra de los señores Luis Jorge Cando Landa y Carmen Yolanda Castillo Guevara, en el que se declaró que existe la responsabilidad de la sumariada por considerar que su actuación como fiscal, habría incurrido en manifiesta negligencia, conforme al análisis realizado por los juzgadores, quienes en lo principal manifestaron que la fiscal hoy sumariada, incumplió el principio de objetividad en la correcta aplicación de las leyes y respeto a los derechos de las personas, al solicitar que se fije fecha para la audiencia de formulación de cargos, pese a que previamente se había dictado un auto de nulidad a favor de los procesados en el juicio por receptación 16281-2018-00548 (investigación previa 160101817080124); por otra parte, la abogada Jéssika Patricia Delgado Avilés (sumariada), no compareció a la audiencia solicitada en el proceso judicial 16281-2020-00034 (investigación previa 160101817080124); y, finalmente, haberse dictado auto de sobreseimiento en el proceso judicial 16281-2020-00424 (investigación previa 160101817080124).

La Corte Constitucional del Ecuador, ha señalado en la Sentencia No. 3-19-CN/20, de 29 de julio de 2020, que: “**68.** *En cuanto al carácter dañino del error inexcusable, hay que destacar que al igual que*

⁷ Corte IDH, Caso Chocrón Chocrón vs Venezuela, Sentencia de 1 de julio de 2011, párrafo 120.

en el caso del dolo y la manifiesta negligencia, lo que se protege al sancionar estas infracciones es el correcto desempeño de las funciones públicas de juez o jueza, fiscal o defensor público, cuya actuación indebida genera de por sí un grave daño en el sistema de justicia. No obstante, y conforme con el artículo 110 numeral 5 del COFJ, la valoración de la conducta del infractor debe incluir el examen de 'los resultados dañosos que hubieran producido la acción u omisión', lo cual incluye a los justiciables o a terceros. (...). (Lo resaltado no pertenece al texto original)

Ahora bien, cabe indicar que una de las funciones del Consejo de la Judicatura, es velar por la eficiencia la Función Judicial, de conformidad con el artículo 181 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador; razón por la cual, uno de los objetivos de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, es sancionar aquellos servidores judiciales en el ejercicio de sus funciones, han transgredido dicho interés jurídico y por ende han ocasionado un efecto gravoso; en este caso, la impunidad del delito analizado, conforme la resolución emitida por el voto de mayoría de los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, es la señalada en el artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial (manifiesta negligencia).

En aplicación del artículo 110 del Código Orgánico de la Función Judicial, el cual establece las circunstancias constitutivas de la infracción imputada, a fin de establecer la gravedad o no de la misma, es pertinente analizar las mismas; por lo que, cabe indicar lo siguiente: **“1) Respeto a la naturaleza de la falta (...)**”, en este caso la infracción por la que se inició el presente proceso sumarial se trata de una inconducta calificada como gravísima, al haberse evidenciado que la actuación de la fiscal sumariada fue con desidia; ya que, tal como se menciona en la misma resolución jurisdiccional emitida por el voto de mayoría de los doctores Tania Patricia Massón Fiallos y Bolívar Enrique Torres Ortiz (Juez ponente); y, el voto salvado del doctor Carlos Alfredo Medina Riofrío (voto salvado), Jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, en resolución de 22 de abril de 2020, emitida dentro de la causa 16100-2021-00003G, no revisó correctamente la información acumulada en la investigación previa 160101817080124, cuyo proceso ya fue declarado Nulo previamente; **“2) Grado de participación de la servidora o servidor (...)**”, tal como se puede observar de los recaudos procesales en el presente expediente administrativo, la abogada Jéssika Patricia Delgado Avilés, en calidad de Agente Fiscal de la provincia de Pastaza, le correspondió conocer la referida investigación previa signada con el 160101817080124, lo cual se evidencia del Oficio FPZ-FESR1-1106-2020-000050-O, de 14 de enero de 2020, suscrito por la aludida servidora judicial sumariada, mediante el cual solicitó a uno de los jueces de la Unidad Judicial Penal y Tránsito de Pastaza (Puyo), que se fije día y hora para convocar a la audiencia de formulación de cargos en contra de los procesados Luis Jorge Cando Landa y Carmen Yolanda Castillo Guevara; **“c) Otros elementos atenuantes o agravantes que consten en el sumario disciplinario (...)**”, ante lo cual cabe acotar que uno de los elementos agravantes es las actuaciones de la misma sumariada quien refleja varias sanciones disciplinarias tal como se observará en el numeral 13 de esta resolución, en consecuencia al haberse determinado que existen varias situaciones agravantes en el cometimiento de la falta, lo cual deviene.

12. ANÁLISIS AUTÓNOMO Y SUFICIENTEMENTE MOTIVADO RESPECTO A LOS ALEGATOS DE DEFENSA DE LA AGENTE FISCAL SUMARIADA

Que *“(...) es muy explícito el interés personal de la autoridad Fiscal y la falta de objetividad y ausencia de conocimiento de la normativa vigente por parte del Dr. Edgar Cajas Robalino, quien conociendo el procedimiento y pese a la negativa del perito, dispuso algo contrario a la ley alterando la verdad para favorecer a una de las partes. / 3.- De fojas 413 en la parte final del impulso fiscal el homólogo Fiscal dispone al bodeguero de Policía Judicial retire el motor del vehículo de placas PNK0201 y una vez que ha retirado dicho motor de fojas 419 en el impulso fiscal Nro. 41 dispone la devolución del vehículo (sin motor) o lo señora LOPEZ ATIAJA MYRIAN MARLENE, y con dicha decisión SALOMÓNICA*

incurriría el Fiscal en el delito contemplado en el Art. 292 del COIP que establece: ‘... Alteración de evidencias y elementos de prueba.- La persona o la o el servidor público, que altere o destruya vestigios, evidencias materiales u otros elementos de prueba para la investigación de una infracción, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años..’ / Con todo lo expuesto y de la revisión del expediente fiscal y judicial podrá colegir que de mi persona no he incurrido en ninguna falta contemplado en el Código Orgánico de la Función Judicial, e incluso sorprende de sobremanera dicha denuncia ya que la misma beneficia a la denunciante como parte procesada.” (Sic).

En este sentido, no se evidencia en el proceso la afirmación realizada por la sumariada respecto del interés del fiscal que le precedió en la investigación 160101817080124, además que estas atribuciones no pueden ser verificadas; ya que, del texto de la contestación se observa que el doctor Edgar Cajas Robalino, se encontraría fallecido a la fecha.

Que “(...) La Resolución Jurisdiccional dentro del proceso 16100-2021-00003G es completamente ajena a los hechos y contradictoria en derecho respecto a lo siguiente: / 1.1 En el acápite CUARTO donde se realiza el ANÁLISIS DE PETICIÓN PARA DECLARATORIA JURISDICCIONAL PREVIA, se verifica la falta de motivación al momento de enmarcar mi actuación en la infracción contenido en el artículo 109.7 del Código Orgánica de la Función Judicial, ya que no existe un análisis de los hechos frente o la existencia de las circunstancias constitutivas de lo infracción conforme lo manda el art. 110 del Código Orgánica de lo Función Judicial, (...) sobre todo se indique los resultados dañosos que supuestamente ocasionó mi actuación como Fiscal desde el año 2020. (...) SEXTO: RESOLUCIÓN, es evidente que los señores Jueces no han revisado el expediente íntegro de Fiscalía, a fin de verificar, quienes fueron los Fiscales que conocieron la noticia de delito 160101817080124, ya que mediante memorando Nro. FPZ- DP-2019-00295-M, de fecha 25 de noviembre de 2019, avoco conocimiento de lo Unidad que era del Fiscal Edgar Cajas (+), y mediante acción de personal 4994-DTH-FGE de fecha 12 de diciembre del 2019, fui suspendida del cargo por 30 días. Ni siquiera han solicitado las acciones de personal de todos los agentes Fiscales que conocieron lo causa, no se tomó en cuenta lo que manda el art. 115 del Código Orgánico de la Función Judicial, en consideración a lo que manda el COIP en el Art. 444 claramente establece las Atribuciones de la o el fiscal y en el numeral 3 expresamente dice: ‘Formular cargos, impulsar y sustentar la acusación de haber mérito o abstenerse del ejercicio público de lo acción’, es decir cada acto realizado en calidad de Fiscal por mi persona estuvo enmarcado en base a los atribuciones establecidos por la constitución y la ley. NO se revisaron los directrices Fiscales para el sorteo de las noticias de delito, las resoluciones para el sorteo de las peticiones de formulación de cargos, ya que se evidencia el desconocimiento de dichos procedimientos misionales y administrativos. En dicho acápite de RESOLUCIÓN establecen erróneamente los dos jueces lo siguiente: ‘...precipitándose o realizar otra investigación sobre el mismo hecho que se substancio en Fiscalía con un único número este es 160101817080124, a sabiendas que el juicio No. 16281- 2018-00548 no se encontraba ejecutoriado el auto de nulidad y deba pronunciarse la resolución en el proceso anteriormente descrito, y violentando así lo que dispone la norma constitucional en el Art. 76 numeral 7 literal i CRE. Se ha vulnerado el debido proceso en el Art. 76 numeral 1 y 7 de lo Constitución de República del Ecuador, es decir con la documentación del proceso se probó su actuación negligente a su deber como Fiscal, incumpliendo el principio de objetividad como lo establece el Art. 5.21 del COIP al no adecuar sus acciones a un criterio objetivo, en la correcta aplicación de la ley y el respeto a los derechos de las personas. Es decir, no se ejecutoriaba todavía el auto de nulidad en el juicio No. 16281-2018-00548, ya se estaba solicitando lo audiencia de formulación de cargos contra los mismos procesados del auto de nulidad, actuando con uno enorme negligencia de la Fiscal antes mencionada y sin notificar las nuevos actuaciones o los procesados con las diligencias realizados por ella, subsanado así de esta manera los dos autos de nulidad dictados por la jueza de la Unidad Penal de inteligenciar a su Autoridad de que en ningún momento se ha iniciado una nueva investigación, es por eso que desde el año 2017 se ha mantenido la noticia de delito o investigación previa

160101817080124, (...) Cabe mencionar que de acuerdo a estas directrices los Fiscales de las Unidades Especializadas no somos los responsables del sorteo o asignación de investigaciones, lo que una vez más PREVALECE EN DICHA RESOLUCIÓN de los dos Señores JUECES, es una falta de conocimiento de las atribuciones de los Fiscales de la normativa que regula o los mismos en sus actuaciones. Mucho peor aún establecer una responsabilidad en mi persona por que se hayan generado sorteos de causas judiciales (RESPONSABILIDAD DE JUDICATURA).” (Sic).

Que la resolución no contiene un acápite que analice las alegaciones presentadas en el proceso, inobservando los principios de motivación y tutela judicial efectiva, frente a estas afirmaciones cabe indicar que el artículo 109.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece de manera clara y categórico que el procedimiento disciplinario por dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable, debe seguir un procedimiento previo al administrativo, teniendo una primera etapa que se refiere a la declaración jurisdiccional previa y motivada de la existencia d de dolo, manifiesta negligencia y/o error inexcusable, imputables a una jueza, juez, fiscal o defensora o defensor público en el ejercicio del cargo, para posteriormente, seguir una segunda etapa que se refiere al sumario administrativo propiamente, que deberá seguirse ante el Consejo de la Judicatura, que es el Órgano de Control dispuesto por la misma Constitución de la República del Ecuador; por lo que, los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de la Pastaza, han realizado su análisis jurisdiccional de los hechos, en tal sentido, no se observa algún tipo de vulneración de derechos.

Que tampoco se realiza un análisis sobre la serie de nulidades procesales que no fueron a su costa y no se pronuncian sobre la deficiente actuación del Defensor Público, abogado Telmo Arteaga y la propia denunciante quien es abogada y si no estaba de acuerdo con dichas decisiones, debían impugnarlas en el momento oportuno, pero no lo hicieron, beneficiándose a lo postre de su propia negligencia, así también se omite las actuaciones del Fiscal Edgar Cajas (+), así como otras actuaciones como: “(...) 1.- De fojas 101 del expediente consta el oficio FPZ-FESR1-1106-2017-001966-O, suscrito por la Ab. Paulina Manzano, fiscal encargada, en donde dispone al Gerente de la Transcomunidad EP de Pastaza se registre de manera inmediata la PROHIBICIÓN DE ENAJENAR de los vehículos de placas PRZ0369 y PNK0201, sin ser la autoridad competente para disponer medidas cautelares, atribuyéndose funciones y violentando derechos de las partes. 2.- De fojas 364 consta el oficio en donde el Dr. Edgar Cajas Robalino dispone la remarcación sin fundamentación legal alguna y de fojas 372 consta lo respuesta fundamentada del perito respecto a NO realizar LA REMARCACIÓN, sin embargo con fecha 27 de julio y 31 de julio del 2018 se insiste en el cumplimiento de dicha REMARCACIÓN, la cual se cumple por insistencias del fiscal y cuyo informe consta de fojas 399 a 401 donde se verifica la Remarcación ERRONEA dispuesta por el Fiscal quien al disponer todo esto se predomina por parte de la suscrita estaría incurriendo en lo establecido en el Art. 272 del COIP que establece: ‘Fraude procesal.- La persona que con e/ fin de inducir a engaño a la o al juez en el decurso de un procedimiento civil o administrativo, antes de un procedimiento penal o durante él, oculte los instrumentos o pruebas, cambie el estado de los cosas, lugares o personas. Será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años. Con igual pena será sancionada quien conociendo lo conducta delictuosa de una o varios personas, les suministren alojamiento o escondite, o les proporcionen los medios para que se aprovechen de los efectos del delito cometido, o les favorezcan ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción, o utilizando las señales o huellas del delito, para evitar su represión y los que, estando obligados por razón de su profesión, empleo, arte u oficio, a practicar el examen de los señales o huellas del delito o el esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad, con propósito de favorecerlos.’, es muy explícito el interés personal de la autoridad Fiscal y la falta de objetividad y ausencia de conocimiento de la normativa vigente por parte del Dr. Edgar Cajas Robalino (...)” (sic); al respecto, cabe indicar que no es posible realizar un mayor análisis respecto de la actuación del referido servidor; por cuanto, tal como se ha explicado por la sumariada, el doctor Edgar Cajas Robalino, ha fallecido y la denuncia se encuentra cuestionando la participación de la abogada Jéssika

Patricia Delgado Avilés, además cabe recalcar que las posibles faltas que hubiere cometido el doctor Edgar Cajas Robalino (+), fueron revisadas jurisdiccionalmente mediante auto de nulidad de 4 de febrero de 2019, emitido por el doctor Aurelio Agustín Quito Cortez, Juez de la Unidad Penal del cantón Pastaza. Respecto a lo manifestado que supuestamente los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Pastaza, que no se habría realizado correctamente un análisis de los hechos; sin embargo, dicho análisis se sujetó a revisar las actuaciones de la servidora sumariada y por lo que al contar con todas las piezas procesales de la investigación previa, dio lugar a su pronunciamiento jurisdiccional, por lo que no se puede realizar mayor análisis al respecto.

13. ANÁLISIS DE REINCIDENCIA

Conforme se desprende de la certificación conferida por la Secretaria encargada de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, de 13 de mayo de 2022, la abogada Jéssika Patricia Delgado Avilés, registra las siguientes sanciones:

- Suspensión del cargo sin goce de remuneración por el plazo de treinta (30) días, por cuanto dentro del proceso penal 16281-2015-00189, por muerte culposa la fiscal prescindió de la prueba testimonial pertinentes para el esclarecimiento de la infracción penal y por ende de la responsabilidad del procesado, inobservando lo establecido en el inciso segundo del artículo 172 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo establecido en el numeral 21 del artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal; infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el numeral 8 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial, por la vulneración a la tutela judicial efectiva y al derecho a la defensa, derechos contemplados en los artículos 75 y numeral 7 literal a) del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, conforme consta de la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura, de 22 de octubre de 2018, emitida en el expediente MOT-1365-SNCD-2017-SR (0037S-2017).
- Suspensión del cargo sin goce de remuneración por el plazo de treinta (30) días, por cuanto la servidora sumariada vulneró los derechos constitucionales consagrados en los artículos 75 y 78 de la Constitución de la República del Ecuador y no observó lo dispuesto en los numerales 2 y 11 del artículo 11 del Código Orgánico Integral Penal, al no conceder la atención integral y oportuna a la víctima dentro del juicio de violencia intrafamiliar 16571-2019-00312, ocasionando la revictimización de la agredida, conforme lo ha declarado el doctor Luis Rodrigo Miranda Chávez, Juez de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o miembros del Núcleo Familiar, en sentencia de 13 de junio de 2019; infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el numeral 8 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme consta de la resolución del Director General del Consejo de la Judicatura de ese entonces, de 11 de diciembre de 2019, emitida en el expediente MOT-0907-SNCD-2019-JH (16001-2019-0008-S).
- Suspensión del cargo sin goce de remuneración por el plazo de treinta (30) días, por cuanto la servidora sumariada vulneró los derechos a la tutela judicial efectiva y de no revictimización consagrados en los artículos 75 y 78 de la Constitución de la República del Ecuador, al haber inobservado lo dispuesto en los numerales 2 y 11 del artículo 114 del Código Orgánico Integral Penal; por cuanto, no habría brindado a la víctima la atención integral descrita en la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres, conforme lo establecido en la sentencia de 10 de julio de 2019, a las 16h30, emitida por el Juez de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o Miembros del núcleo familiar con sede en el cantón Pastaza, dentro del juicio por contravenciones de violencia contra la mujer 16571-2019-00362; infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el numeral 8 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme

consta de la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura, de 27 de febrero de 2020, emitida en el expediente MOT(A)-1052-SNCD-2019-JS (16001-2019-0012S).

- Suspensión del cargo sin goce de remuneración por el plazo de treinta (30) días, por cuanto la servidora sumariada dentro del juicio de violencia intrafamiliar 16571-2019-00572, vulneró no solamente el derecho a la tutela judicial efectiva, al haber revictimizado a la señora al momento de obtener y valorar pruebas, sino que también, vulneró el debido proceso, en la garantía establecida en el artículo 76 numeral 7 literal l) de la Constitución de la República del Ecuador, pues conforme lo declaró el doctor Luis Rodrigo Miranda Chávez, Juez de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, la sumariada sin explicación y sin motivación alguna, al no haber fundamentado su necesidad, dispuso una nueva valoración médica respecto de la agresión que había sufrido la víctima; más aún que, dicha decisión la dispuso luego de haberse inhibido de seguir conociendo la causa, por cuanto la sumariada señaló que la gravedad de la infracción (24 horas de incapacidad) constituiría una contravención y no un delito; por lo que, vulneró además el debido proceso en la garantía establecida en el artículo 76 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, así como también el derecho a la seguridad jurídica, reconocido en el artículo 82 del mismo texto constitucional; infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el numeral 8 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme consta de la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura, de 6 de julio de 2020, emitida en el expediente MOT(A)-0005-SNCD-2020-JS (16001-2019-0022S).
- Destitución de su cargo, por ser responsable de haber incurrido en la circunstancia prevista en el inciso final del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial; esto es, reiteración de faltas graves por tres ocasiones en un periodo de un año, de conformidad con la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura, de 28 de diciembre de 2020, emitida en el expediente MOT-0621-SNCD-2020-PC (16001-2020-0009S).

14. SANCIÓN PROPORCIONAL A LA INFRACCIÓN

Es importante indicar que a efectos de determinar la sancionabilidad de la conducta en la que incurrió la servidora judicial sumariada corresponde observar lo establecido en el numeral 6^[1] del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, así como también las circunstancias constitutivas de la infracción disciplinaria establecidas en el artículo 110 del Código Orgánico de la Función Judicial, respecto a los resultados dañosos que hubieran producido la acción u omisión; por lo que, tomando en consideración que la manifiesta negligencia declarada en la que incurrió la servidora judicial, debido a la falta de observancia sobre los hechos que conformaban el proceso judicial por el delito de receptación en el cual no se respetó el debido proceso y de igual manera se constató una falta de debida diligencia por parte de la sumariada al no revisar correctamente todas las piezas procesales constantes en la investigación previa, para luego dar lugar a una contradicción primero pretendiendo formular cargos en contra de los procesados y luego emitir dictamen abstentivo, deviniendo en una falta de atención en los hechos constitutivos del proceso judicial a su cargo; por lo que, al haberse evidenciado el cometido corresponde aplicar el máximo de la sanción establecida en el numeral 4⁸ del artículo 105 del Código Orgánico de la Función Judicial; toda vez que, la sumariada incurrió en una infracción de naturaleza gravísima sancionada con destitución.

^[1] **Ref. Constitución de la República del Ecuador.**- “Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza”.

⁸ **Ref.- Código Orgánico de la Función Judicial.**- “Art. 105.- CLASES DE SANCIONES DISCIPLINARIAS.- Las sanciones disciplinarias serán de las siguientes clases: (...) 4 Destitución.”.

15. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de las consideraciones expuestas, **EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES**, resuelve:

15.1 Acoger el informe motivado emitido por el abogado Eduardo Glicerio Guilcapi Allauca, Abogado Provincial 2 de la Unidad Provincial de Asesoría Jurídica de la Dirección Provincial de Pastaza del Consejo de la Judicatura, de 5 de noviembre de 2021.

15.2 Declarar a la abogada Jéssika Patricia Delgado Avilés, por sus actuaciones como Agente Fiscal de la provincia de Pastaza, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es haber actuado con manifiesta negligencia, conforme así fue declarado por voto mayoritario de los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincia de Justicia de Pastaza, en resolución de 22 de abril de 2021, emitida dentro de la declaratoria jurisdiccional 16100-2021-00003G.

15.3 Imponer a la abogada Jéssika Patricia Delgado Avilés, por sus actuaciones como Agente Fiscal de la provincia de Pastaza, la sanción de destitución de su cargo.

15.4 Notifíquese la presente resolución al Ministerio del Trabajo, por la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra de la servidora judicial sumariada abogada Jéssika Patricia Delgado Avilés, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial.

15.5 Remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, para los fines que prevé el Código Orgánico de la Función Judicial.

15.6 Actúe la Secretaría de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario.

15.7 Notifíquese y cúmplase.

Dr. Fausto Roberto Murillo Fierro
Presidente del Consejo de la Judicatura

Dra. Narda Solanda Goyes Quelal
Vocal Suplente del Consejo de la Judicatura

Dr. Juan José Morillo Velasco
Vocal del Consejo de la Judicatura

Dra. Ruth Maribel Barreno Velin
Vocal del Consejo de la Judicatura

CERTIFICO: que en sesión de 26 de mayo de 2022, el Pleno del Consejo de la Judicatura, por unanimidad de los presentes, aprobó esta resolución.

Abg. Andrea Natalia Bravo Granda
Secretaria General
del Consejo de la Judicatura (E)